



**FACULTAD DE DERECHO
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO**

**“CRITERIOS PARA EL MARCO OBJETIVO DE RECONOCIMIENTO Y
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS SITUACIONES JURÍDICAS
PATRIMONIALES DE LOS CONVIVIENTES EN SEDE JUDICIAL,
NOTARIAL Y REGISTRAL”**

Tesis presentada por el Bachiller en Derecho:

FRANCISCO JOSÉ PEDRO CÁCERES GALLEGOS

Para optar el título profesional de Abogado

Asesor: Maestro Cesar Augusto de la Cuba Chirinos.

AREQUIPA – PERÚ

2016

Para mis padres, quienes con su amor incondicional, han sabido apoyarme, en la búsqueda de mejorarme como persona y profesional, motivo sin el cual no hubiera sido posible el logro de mis objetivos en el ámbito académico.

INDICE

	Págs.
RESUMEN	5
INTRODUCCIÓN	6
 CAPITULO I: LAS UNIONES DE HECHO EN EL PERU	 7
1. LAS UNIONES DE HECHO EN EL TIEMPO	7
2. LA UNIÓN DE HECHO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1979	9
3. UNIÓN DE HECHO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993	12
4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CONSTITUCIONES DE 1979 y 1993	15
5. UNIÓN DE HECHO EN EL CÓDIGO CIVIL DE 1984	16
6. LAS RELACIONES PERSONALES ENTRE LOS CONVIVIENTES	24
7. LOS DERECHOS SUCESORIOS DE LOS CONVIVIENTES	27
 CAPITULO II: LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE LA UNIÓN DE HECHO	 35
1. EL RECONOCIMIENTO DE LAS UNIONES DE HECHO Y SU INSCRIPCION REGISTRAL	35
1.1. RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE LAS UNIONES DE HECHO	35
1.2. RECONOCIMIENTO NOTARIAL DE LAS UNIONES DE HECHO	42
1.3. INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LAS UNIONES DE HECHO	45
2. EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LAS UNIONES DE HECHO	49
2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD O COMUNIDAD DE BIENES CONVIVENCIAL	49
2.2. AUTONOMÍA DE LOS CONCUBINOS PARA VARIAR O SUSTITUIR A SU RÉGIMEN PATRIMONIAL	58

CAPITULO III: ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS	66
1. PRESENTACION	66
2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS	67
3. DISCUSION DE LOS RESULTADOS	75
CONCLUSIONES	76
SUGERENCIAS	78
BIBLIOGRAFIA	79

RESUMEN

Este análisis es realizado en base a la necesidad de delimitar los criterios para el marco objetivo de reconocimiento y protección jurídica de las situaciones jurídicas patrimoniales de los convivientes en sede judicial, notarial y registral, puesto que es deber del Estado garantizar los derechos fundamentales de las uniones de hecho en el marco de las relaciones familiares.

Es así que la presente investigación está enfocada en querer analizar si dicho marco objetivo es adecuado o no, ello en vista de que los convivientes tienen una serie de derechos patrimoniales pese a no estar casados. Actualmente en América Latina existe una fuerte corriente jurídica que está otorgando al conviviente todos los derechos que le son inherentes tomando como base analógica a las uniones matrimoniales, por lo que este trabajo de investigación trata de esclarecer la situación jurídica patrimonial de los convivientes en nuestro País; la falta que les hace dichos derechos y el desamparo en el que se encuentran y que incluso en muchas veces no son conscientes de ello.

La familia como sabemos es el conjunto de personas unidas no sólo por el matrimonio sino también es tomada en cuenta en su orden natural, es decir la “familia de hecho”, la misma que también es merecedora de tutela y debe ser apreciada como un fenómeno social que no puede desconocerse y al cual corresponde reconocer las consecuencias jurídicas pertinentes.

Teniendo en cuenta la relevancia de este tema nace aquella necesidad de conocimiento, análisis jurídico y observación de resultados reales ante la situación social y jurídica del de reconocimiento y protección jurídica de las situaciones jurídicas patrimoniales de los convivientes en sede judicial, notarial y registral en nuestro país.

INTRODUCCION

Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de tesis Titulado **“CRITERIOS PARA EL MARCO OBJETIVO DE RECONOCIMIENTO Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS SITUACIONES JURÍDICAS PATRIMONIALES DE LOS CONVIVIENTES EN SEDE JUDICIAL, NOTARIAL Y REGISTRAL”** el cual está destinado a determinar cuáles son los criterios para el marco objetivo de reconocimiento y protección jurídica de las situaciones jurídicas patrimoniales de los convivientes en sede judicial, notarial y registral.

Este trabajo pretende mejorar la regulación en cuanto a las situaciones jurídicas patrimoniales de los convivientes en sede judicial, notarial y registral, es por ello que con este propósito inicio esta investigación documental y de campo, desarrollando para ello dos capítulos que describen mis variables de estudio, como asimismo un capítulo de resultados que tendrá por escenario la opinión de magistrados, notarios , registradores y abogados de la especialidad del derecho de familia de la ciudad de Arequipa que opinarán sobre la idoneidad de los criterios jurídicos que sustentan la inscripción registral de las uniones de hecho propias y que permiten cautelar los derechos patrimoniales de los convivientes.

Los resultados de la investigación me han permitido elaborar conclusiones respecto de la idoneidad de las leyes que regulan los derechos patrimoniales de los convivientes y sugerencias que permitan brindar una protección jurídica patrimonial propia de una fuente de familia.

CAPITULO I

LAS UNIONES DE HECHO EN EL PERU

1. LAS UNIONES DE HECHO EN EL TIEMPO

Tradicionalmente el término unión de hecho o concubinato con el que también suele llamarse a esta forma de familia, se refiere a la relación de un hombre y una mujer quienes hacen vida de casados sin estarlo. Concubinato deriva del latín “concumbere”, que significa “dormir juntos”. La unión estable del hombre y la mujer sin la recíproca intención de estar unidos en matrimonio, se considera por los juristas como concubinato. En el caso de personas que no tienen IUS CONNUBI, su unión se considera como matrimonio injusto o como concubinato¹. Néstor Solari, citaba que concubina es la mujer que hace vida en común con el hombre. En cambio “concubinario”, es el hombre, que hace vida en común con la mujer. Adviértase que el diccionario, según la Real Academia Española, no contempla el término usual entre nosotros, de “concubino”².

Tomando las ideas de Corral Talciani, Peralta Andía decía que una unión de hecho se trata de una situación fáctica que consiste en la cohabitación de un varón y de una mujer para mantener relaciones sexuales estables y “vivir juntos” no ‘hasta que la muerte lo separe’, sino hasta que la ‘vida los separe’³.

Esta forma de unión hombre y mujer es muy antigua, de hecho hay antecedentes de uniones de hecho en el Código de Hammurabi, que data de 2000 años A.C.

Los romanos conocieron al concubinato y lo toleraron para facilitar la unión de un hombre y de una mujer, cuando estos estuvieran impedidos de celebrar justas nupcias por razones sociales o jurídicas, por ejemplo se estableció el concubinato entre el patrón y su

¹ C. FONSECA TAPIA, *Derecho Romano*, Adrus, Arequipa, 2007 2ª ed., p. 161

² N. SOLARI, *Liquidación de Bienes en el Concubinato*, Ediciones Jurídicas. Buenos Aires, 1999. p. 18

³ J. PERALTA ANDÍA, *Derecho de Familia en el Código Civil*, Idemsa, Lima, 2008, 4ª ed., p. 131

manumitada, entre un ciudadano romano y una extranjera. El concubinato era el consorcio lícito de un hombre con una mujer sin que entre ellos hubiese matrimonio, era un matrimonio desigual en el que la mujer no podía alcanzar la posición que en la sociedad gozaba su marido. Aunque autorizado por las costumbres y permitido por las leyes, el concubinato era una unión inferior a las justas nupcias⁴.

La Iglesia Católica posteriormente condenó al concubinato, este era considerado como un pecado de fornicación y se empiezan a tomar medidas drásticas en contra de estas uniones, el concubinato empezó a ser considerado como algo inmoral y adúltero que merecía ser sancionado. El Concilio de Trento (1545-1563) estableció prohibiciones sobre el establecimiento progresivo de las relaciones fuera del matrimonio, con este último concilio se consideró obligatoria la celebración del matrimonio y su asiento en los registros parroquiales, exterminando el matrimonio presumido, lo que es una declaración de muerte al concubinato⁵.

El derecho francés decidió ignorar al concubinato, no lo sancionaba, pero tampoco le reconocía derecho alguno, Napoleón había dicho que así como los concubinos se mantienen al margen de la ley, la ley debe mantenerse al margen de los concubinos. Al respecto decía Villón Ángeles que “La influencia negativa no cambió ni siquiera con el advenimiento de la revolución francesa, que marca el inicio de un Estado Liberal, toda vez que el legislador reconoció como institución familiar sólo a los que se fundaban en el matrimonio, por el contrario más bien, la historiografía jurídica cuenta que Napoleón Bonaparte, en su intervención durante la elaboración del Code, había señalado ‘si los concubinos ignoran la Ley, la Ley los ignora a ellos’. La promulgación del Code, ejerció marcada influencia en el derecho euro-continental, iniciándose con ella la corriente de codificación que también fue seguida en Latinoamérica”⁶.

⁴ L. ALZAMORA, SILVA, *Derecho Romano*, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1946, pp. 115-116

⁵ E. VARSÍ ROSPIGLIOSI, “*Consideraciones generales sobre la unión de hecho*”, El Nuevo Rostro del Derecho de Familia, Motivensa, Lima, 2014, 1ª ed.p. 67

⁶ N. VILLÓN ÀNGELES, “*La ley Nro. 30007, un avance hacia la concepción pluralista de la Familia*”, El Nuevo Rostro del Derecho de Familia, Motivensa, Lima, 2014, 1ª ed., p.83

En el Perú pre-colonial y colonial, existió una especie de unión de hecho llamada *Servinakuy*, en palabras de Cornejo Chávez, esta se forma con la abreviación castellana, *servi*, alusiva a servicio, y el afijo quechua *nakuy*, que tiene una connotación de mancomunidad, ayuda o participación⁷.

2. LA UNIÓN DE HECHO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1979

Dentro de nuestro derecho positivo republicano, las uniones de hecho fueron un tema no tratado por los Códigos Civiles de 1852 y de 1936, en aquellos años únicamente se encontraban referencias de uniones de hecho en la jurisprudencia, donde eran tratadas desde el punto de vista del enriquecimiento indevido, siendo que la mujer era casi siempre quien padecía el abandono de su conviviente, quedando sumergida en estado de necesidad.

La primera vez que el concubinato fue regulado como tal, fue en la Constitución Política de 1979, así el artículo 9 señalaba que: “La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto es aplicable”.

Rubio Correa⁸ comentando el artículo 5° de la actual Constitución Política de 1993, hace referencia al antecedente de este artículo –el artículo 9° de la Constitución de 1979– mencionando que hasta 1980 una pareja que convivía en el Perú no generaba entre sí ningún lazo formal, ni de carácter personal, ni de contenido económico. Señalando asimismo que la convivencia de varón y mujer, aun cuando fuera muy semejante a un matrimonio, no recibía trato análogo en absoluto. Tampoco a partir de esa convivencia se formaba una familia formalmente constituida. Lo único que aparecía era la relación paterno-filial con cada progenitor⁹.

⁷ H. CORNEJO CHÁVEZ, *Derecho Familiar Peruano*, Lima, 1985, 5ª ed., p.82

⁸ M. RUBIO CORREA, *Estudio de la Constitución Política de 1993*, Lima, 1999, 1ª ed., p. 53

⁹ *Ibíd.*

Sin embargo, la protección jurídica que brindó la Constitución de 1979 al concubinato, únicamente se circunscribió al ámbito patrimonial, esto en vista que el constitucionalismo de aquellos años, asociaba la familia a la unión matrimonial, se reconoce por primera vez que esta unión genera una sociedad de bienes, esto con el fin de proteger principalmente a la concubina del abandono injustificado y del enriquecimiento injustificado de su pareja, permitiéndole participar del patrimonio que ambos convivientes hubieran generado.

Paz Soldan¹⁰ al comentar el artículo 9º de la Constitución de 1979 y refiriéndose al concubinato, citaba que en la sierra se reduce a menudo a la unión sexual del hombre y la mujer para procrear hijos y ayudarse en el trabajo, pero sin entenderla (la familia) como una institución sagrada y definitiva, practicando el servinacuy, aunque la Constitución protege a la mujer en ese sistema. Cabe anotar lo que para Paz Soldan es la familia y ver como era la concepción en aquella época, la define como la principal institución social fundada sobre la idea central de la perpetuidad del hogar; y por el mutuo interés de los esposos y de los hijos se funda sobre el matrimonio. En ella nos podemos dar cuenta de que familia era igual a matrimonio.

Ruiz-Eldredge¹¹ también menciona comentando este artículo 9 de la Constitución Política de 1979 lo siguiente: “Este dispositivo reposa en la realidad nacional. Hay numerosas uniones libres de pareja que no tienen impedimento matrimonial. Se les llama despectivamente concubinos. En verdad son compañeros y conforman una familia y un hogar de hecho como la llama la Carta al establecer que tal unión “da lugar a una sociedad de bienes”.

También mencionaba Sanabria Vivas¹² que la sociedad de gananciales da derecho a los cónyuges sobre el patrimonio familiar, los convivientes o concubinos tienen también acceso a ella, conforme a nuestro Derecho vigente.

¹⁰ J. PAZ SOLDAN, *Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979*, Lima, 1980, 6ª ed., p. 595

¹¹ A. RUIZ ELDREDGE, *La Constitución Comentada*, Lima, Perú, 1979, pp. 43-44.

¹² L. SANABRIA VIVAS, *Comentarios a la nueva Constitución de la República del Perú 1979*, Luan, Lima, 1980, 2ª ed., p. 51

Arias-Schreiber haciendo alusión a Cornejo Chávez¹³, manifestaba en referencia al concubinato que sigue siendo en la actualidad, sobre todo en algunos países, un serio problema sociológico y jurídico. Más aún en una modalidad que empieza a tener significación en los países más industrializados, en los que el progreso científico, técnico y económico parece correr parejas con cierta descomposición moral, típica por lo demás, de las épocas de decadencia de las culturas. En efecto, mientras en otros países el concubinato suele originarse en el más bajo nivel cultural, esto no se diferencia mucho de los lugares que en el Perú suele darse la unión de hecho, mas en la sierra como en la costa. Agrega Cornejo – que la nueva Constitución (1979) y el Código Civil recientemente promulgado introducen en esta delicada materia un tratamiento más directo y frontal, aunque no exhaustivo. Continúa Arias-Schreiber¹⁴ citando que la Constitución respecto a la unión de hecho, se ha limitado al aspecto patrimonial y que al presentarse sus elementos condicionantes (unión libre que tenga una duración no menor de dos años continuos), se origina una sociedad de bienes, la que a su vez se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, en cuanto le fuera aplicable.

Lo que sí es ajeno al concubinato es la separación de patrimonios por la imposibilidad de sustituir un régimen por el otro. Asimismo la Constitución en mención no abordó los problemas alimentario, hereditario o indemnizatorio.

En síntesis, para la Constitución de 1979 la unión de hecho no es considerada como familia, ya que la familia para la Carta Magna es la formada por matrimonio. Otra característica fundamental es que la unión de hecho fijada en la Constitución es puramente patrimonialista, es productora de puros efectos patrimoniales.

¹³ M. ARIAS-SCHREIBER PEZET, *El Derecho de Familia y los Contratos en La Familia en el Derecho Peruano. Libro Homenaje al Dr. Héctor Cornejo Chávez*, PUCP, Lima, 1992, 2ª ed., pp. 271-273

¹⁴ *Ibíd.*

3. UNIÓN DE HECHO EN LA CONSTITUCIÓN DE 1993

El derecho a contraer matrimonio reconocido por convenios internacionales y por las Constituciones de los diferentes países, importa también el derecho a no hacerlo. En ese sentido la convivencia entre hombre y mujer, cualquiera que sea su denominación, no contradice los valores culturales de la comunidad, en razón de que las funciones asumidas por la pareja son similares a las matrimoniales. A efectos de asegurar el cumplimiento de los elementales principios de solidaridad y cooperación familiar, corresponde regular los efectos de estas uniones¹⁵.

Desde mediados del Siglo XX es que los ideales de libertad en las diversas sociedades, ha dado origen a que las personas elijan formas diferentes de constituir familia a la familia matrimonial, es por eso que en el Derecho de Familia contemporáneo algunos autores se han referido a la existencia de una supuesta crisis de la familia, las mujeres fueron dejando las labores del hogar y de crianza de los hijos para forjarse como profesionales y trabajar en paridad con los varones, la doctrina y la jurisprudencia empezaron a reconocer derechos recíprocos a hijastros y padrastrós dentro de las llamadas familias ensambladas o reconstituidas, las parejas empezaron a huir y evitar de las formalidades y altos costos del matrimonio incrementándose las uniones de hecho, los índices de divorcio también se incrementaron, estos cambios en la sociedad definitivamente influyeron en el constitucionalismo moderno, lo cual se vio reflejado en la Constitución Política de 1993.

El cambio parte desde el modelo constitucional de familia, a diferencia de la Constitución Política de 1979, donde los términos familia y matrimonio eran inseparables, la Constitución Política de 1993 separa éstos términos, reconociendo como fuente de familia a otros modelos familiares de facto como las uniones de hecho, a las cuales no sólo les brinda reconocimiento sino también protección. Como citaba Calderón Beltrán¹⁶, el texto constitucional de 1993 no se ha ceñido a una concepción especial, no identifica a una entidad familiar en específico, ni se identifica en forma plena con la familia matrimonial, bajo esa base, algunos especialistas sostienen que la Constitución actual simplemente ha hecho referencia a un solo tipo de familia, sin importar que sea de origen matrimonial o

¹⁵ A. GIL DOMINGUEZ, M. FAMA y M. HERRERA, *Derecho Constitucional de Familia*, Tomo I., Ediar. Buenos Aires, 2006, p. 116

¹⁶ J. CALDERÓN BELTRÁN, *La Familia Ensamblada en el Perú*, Adrus, Lima, 2014, 1ª ed., p. 39

extramatrimonial y sin considerarse su base de constitución legal o de hecho. Agregando este mismo autor que hablando en términos generales, el modelo de familia propugnado por la Constitución y que merece la mayor protección por parte del Estado y de la comunidad, debe sin hacer ninguna referencia a alguna tipología especial de familia y bajo un concepto pluralista, enmarcarse en aquella asociación humana estable y pública, donde sus integrantes se unan en comunidad de vida y a través de la convivencia, satisfagan sus necesidades, alcancen sus aspiraciones, desarrollen sus proyectos de vida, compartan afecto, perpetúen la especie y cuiden a la prole, sin que éstos dos últimos requisitos sean absolutos o forzosos¹⁷.

Esta protección constitucional a las uniones de hecho también ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional cuando se citó que: *“sin importar el tipo de familia ante la que se esté, ésta será merecedora de protección frente a las injerencias que puedan surgir del Estado y de la sociedad. No podrá argumentarse, en consecuencia, que el Estado solo tutela a la familia matrimonial, tomando en cuenta que existen una gran cantidad de familias extramatrimoniales. Es decir, se comprende que el instituto familia trasciende al del matrimonio, pudiendo darse la situación de que extinguido este persista aquella. Esto no significa que el Estado no cumpla con la obligación de la Constitución en cuanto promover la familia matrimonial, que suponen mayor estabilidad y seguridad de los hijos”*¹⁸.

Las uniones de hecho han sido reguladas en el artículo 5° de la Constitución Política de 1993, el cual dice que: “La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable”.

Comentando este artículo 5 de la Constitución de 1993, citaba Plácido Vilcachagua¹⁹ que si bien el artículo 5 de la Constitución de 1993 alude expresamente a los efectos patrimoniales de dicha unión, no puede pasar desapercibido que el texto también refiere a

¹⁷ Ibídem, p.43.

¹⁸ STC EXP. N.° 06572-2006-PA, del 06 de noviembre del 2007, F.J. 11

¹⁹ A. PLÁCIDO VILCACHAGUA, *El Principio de Reconocimiento Integral de las Uniones de Hecho*, en: <http://blog.pucp.edu.pe/item/21555/el-principio-de-reconocimiento-integral-de-la-union-de-hecho-primer>

la conformación de un hogar de hecho y, como es innegable, cualquier hogar se sustenta en el afecto de la pareja con fines de constituir una familia, compartiendo metas, proyectos, valores y, por lo general, para tener descendencia, dando lugar a relaciones personales entre los componentes del grupo familiar. Surgiendo, por tanto, de la unión de hecho una familia, ésta merece la protección que confiere el ordenamiento jurídico a la institución; sin desconocer que debe promoverse el matrimonio como la principal base de constitución.

En síntesis, la unión de hecho es una fuente generadora de una familia, ésta ha dejado de ser productora de puros efectos patrimoniales, la Constitución de 1993 establece que esta unión de hecho es productora de efectos tanto personales como patrimoniales, desde que de ella nace de una familia. Es por ello, que hoy la familia puede nacer tanto de un matrimonio como de una unión de hecho; extendiéndose a éstas el mandato de protección constitucional a la familia que es citado en el artículo 4 de la Constitución, es por ello que en la actualidad ya no solo se habla sólo de la existencia de un régimen patrimonial convivencial o sociedad de bienes, sino que el derecho ya ha reconocido derechos hereditarios a estos concubinos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional les ha reconocido pensión de viudez y los mismos gozan de un derecho alimentario aunque restringido en comparación a los cónyuges.

En conclusión, siguiendo las ideas de Plácido Vilcachagua, los principios que contendría nuestra vigente Constitución en cuanto al tema de familia, matrimonio y uniones de hecho, serían:

- La familia que la Constitución ordena proteger es la que nace tanto del matrimonio como de la unión de hecho. En ese sentido, a la familia que nace de ambos institutos se le debe reconocer los efectos personales como patrimoniales que respondan al mandato de protección constitucional.
- El matrimonio debe ser promovido por mandato constitucional. A partir de ello, debe considerarse al matrimonio como la principal fuente de la que surge una familia. Pero no significa que sea la única fuente. En efecto, desde que el matrimonio debe ser promovido se advierte que se encuentra en una mayor consideración respecto de la unión de hecho, dentro de las jerarquías de valores constitucionales. A partir de ello, es claro que no pueden ser iguales los

mecanismos que se prevean en la ley para acceder a los efectos personales como patrimoniales que respondan al mandato de protección constitucional.

- La unión de hecho por reconocimiento constitucional es productora tanto de efectos personales como patrimoniales y, por ello, es la otra fuente de la que surge una familia.

4. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CONSTITUCIONES DE 1979 y 1993

Las características de las dos Constituciones referido al tema uniones de hecho, las citaremos en el siguiente cuadro resumen:

Constitución de 1979	Constitución de 1993
<ul style="list-style-type: none"> • Matrimonio es igual a familia. La familia únicamente se genera en base a la unión matrimonial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se separan los términos matrimonio y familia. La familia puede nacer tanto de un matrimonio como de una unión de hecho.
<ul style="list-style-type: none"> • Unión de hecho no es fuente de familia, solo les reconoce efectos jurídicos patrimoniales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se reconoce a la unión de hecho como fuente generadora de familia, capaz de producir por lo tanto efectos jurídicos patrimoniales y personales.
<ul style="list-style-type: none"> • Reconoce a las uniones de hecho el régimen patrimonial de sociedad de bienes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Reconoce a las uniones de hecho el régimen patrimonial de comunidad de bienes.
<ul style="list-style-type: none"> • Se señalaba que las uniones de hecho se originaban por el tiempo y por las condiciones que establezca la ley ordinaria. 	<ul style="list-style-type: none"> • No se menciona la existencia de algún plazo para conformarse la unión de hecho.
<ul style="list-style-type: none"> • No previno el régimen patrimonial de separación de patrimonios para las uniones de hecho. 	<ul style="list-style-type: none"> • No previno el régimen patrimonial de separación de patrimonios para las uniones de hecho.

5. UNIÓN DE HECHO EN EL CÓDIGO CIVIL DE 1984

El Código Civil regula la unión de hecho o concubinato propio en el artículo 326°, el cual establece en la actualidad luego de sus modificatorias lo siguiente:

“La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos.

La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita.

La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales.

Tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de enriquecimiento indebido.

Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo producen, respecto de sus miembros, derechos y deberes sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en los artículos 725, 727, 730, 731, 732, 822, 823, 824 y 825 del Código Civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos en que se aplicarían al cónyuge”.

En un principio el Código Civil de 1984 se sustentó en los postulados de la Constitución Política de 1979, razón por la cual este Código regula casi íntegramente todo el tema de familia en base a la familia matrimonial, estableciendo los requisitos para contraer

matrimonio, los deberes y derechos matrimoniales, el régimen patrimonial matrimonial y las causas de disolución del vínculo matrimonial.

Como decía Plácido Vilcachagua²⁰, esta es la razón por la que al tema de la unión de hecho sólo se le dedica un único artículo: el artículo 326 que la regula en su aspecto patrimonial, el Perú había ratificado en el año 1988, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 15.1 precisa que "Toda persona tiene derecho a constituir familia, el que ejercerá de acuerdo con las disposiciones de la correspondiente legislación interna". El principio de interpretación dinámica de los derechos humanos advierte de la evolución a la que asistimos: de considerar que sólo por contraer matrimonio se funda una familia, se pasa a apreciar que ésta puede ser fundada no sólo por contraer matrimonio. Esta disposición de rango constitucional es, pues, la que determinó contemplar en la Constitución de 1993 la desvinculación de familia y matrimonio. Por ello, hoy ya no se puede razonar desde la perspectiva de la Constitución de 1979 y, por lo mismo, las disposiciones del Código Civil de 1984 deben ser releídas desde la perspectiva de la Constitución de 1993.

El artículo 326 del Código Civil norma a dos tipos de uniones de hecho:

- **La Unión de Hecho Propia:** Que es la unión de hecho a la cual se le reconocen todos los efectos patrimoniales y personales. En palabras de Calderón Beltrán²¹, es la convivencia intersexual, consensuada, estable y habitual, de un varón con una mujer, libres de todo impedimento matrimonial. Hablamos de unión de hecho propia, para referirnos a la unión libre de dos personas solteras, de dos personas que no se encuentran atadas por ningún compromiso matrimonial previo y quiénes se encuentran habilitados para transmutar su unión en un matrimonio civil. Peralta Andía²² decía que esta unión de hecho se presenta como una unión extramatrimonial duradera, entre un varón y una mujer, de modo que puedan transformar su situación de hecho en una de derecho, por no existir impedimento

²⁰ A. PLÁCIDO VILCACHAGUA, *El Modelo Constitucional de Familia, la Orientación Sexual de los Padres y los Derechos del Hijo*. En: <http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/sumario/edon 2/articulos/>

²¹ J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales, Personales, Derechos Sucesorios y su Inscripción Registral*, Adrus, Lima, 2015, 1ªed.,p. 31

²² J. PERALTA ANDÍA, *Derecho de Familia en el Código Civil...*,cit., p. 140

alguno que obste la realización del matrimonio civil. Viven en concubinato propio los solteros, los viudos, los divorciados y aquéllos cuyo matrimonio ha sido declarado nulo judicialmente.

- **Unión de Hecho Impropia o impura:** Que en sentido contrario de la unión de hecho propia, es la convivencia en la cual uno o ambos de los convivientes tienen algún impedimento matrimonial, no pueden contraer matrimonio civil porque uno de los convivientes ya es casado, o porque entre ambos concubinos media alguna otra causa que impida el matrimonio, como padecer de alguna enfermedad crónica y contagiosa, ser parientes en línea recta, el suegro con la nuera, el raptor con la raptada, etc. El artículo 326 del Código Civil no reconoce ningún efecto jurídico patrimonial ni personal a este tipo de unión de hecho, únicamente reconoce para estos concubinos la posibilidad de reclamarse entre sí al enriquecimiento indebido, tal y como está establecido en el último párrafo del artículo 326. Refiriéndose a las uniones de hecho impropias, Bermúdez Tapia²³ citaba que: “Son aquellas uniones convivenciales que no surten efectos legales respecto de los derechos equivalentes a un matrimonio, sin que ello implique una desprotección de los derechos individuales, respecto de futuros planteamientos indemnizatorios o económicos, vinculados a la tutela de los derechos de los dependientes de parte del agente que provocó el perjuicio”. Respecto de este tipo de uniones señalaba Varsi Rospigliosi²⁴, que impuro, de mala fe son algunos de los términos despectivos atribuidos a aquellos que viven este tipo de unión extramarital; este mismo autor afirma que el último párrafo del artículo 326 del Código Civil refiere los efectos que se pueden producir en el caso de la unión de hecho impropia. La acción de enriquecimiento sin causa procede cuando ha mediado empobrecimiento de un sujeto y el correlativo enriquecimiento de otro a expensas de aquel, sin que exista causa que lo justifique, nexos causal y siempre que el perjudicado no disponga de otra acción para reclamar su resarcimiento, artículos 1954 y 1955 del Código Civil. Se dice que es el último remedio jurídico contra la arbitrariedad.

²³ M. BERMUDEZ TAPIA, *Derecho Procesal de Familia*, San Marcos, Lima, 2012, 1ª ed., p. 262

²⁴ E. VARSÍ ROSPIGLIOSI, *Tratado de Derecho de Familia*, Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, 1ª ed., pp. 404-417

Como antes se ha citado, el artículo 326 del Código Civil de 1984 viene a regular a los efectos jurídicos de la unión de hecho propia, estableciendo a través de sus párrafos a las características de esta unión, las cuales las compendiamos en el siguiente cuadro resumen:

Características de las Uniones de Hecho Propias

Art 326 C.C.	Características	Significado
La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio.	Unión voluntaria, heterosexual y monogámica.	La norma se refiere a una unión heterosexual, varón y mujer, además se descarta la poligamia, por eso es que se dice que la unión de hecho es un remedo del matrimonio. Vega Mere ²⁵ citaba al respecto que debe ser una unión entre un hombre y una mujer, es decir, debe tratarse de una unión heterosexual, quedando descartadas las parejas homosexuales. Cuando ambas normas se refieren a “un” varón y a “una” mujer alude a la exigencia de singularidad, de la exclusividad o monogamia, que se traduce en el deber de fidelidad entre los convivientes, que muchos se niegan a concebir para los concubinos bajo la excusa (o denuncia) de que se trata de uniones libres. Por ello, no es posible que se mantengan varias relaciones a la vez, aun cuando todos los involucrados carezcan de impedimentos matrimoniales.

²⁵ Y. VEGA MERE, *Las Nuevas Fronteras del Derecho de Familia*, Motivensa, Lima, 2009, 3ª ed., p. 78

Art 326 C.C.	Características	Significado
<p>La norma dice que esta unión, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos.</p>	<p>Unión estable y pública.</p>	<p>Estabilidad significa que los convivientes efectivamente hagan vida de casados, compartan un hogar y de facto los deberes matrimoniales, asimismo dicha vida en común debe ser pública. Ello nos permite descartar como unión de hecho a aquellas parejas que comparten solamente los fines de semana o las vacaciones o los encuentros casuales²⁶. Al respecto ha citado el Tribunal Constitucional que: <i>“La estabilidad mencionada en la Constitución debe traducirse en la permanencia, que es otro elemento esencial de la unión de hecho. Siendo ello así, la unión de hecho, debe extenderse por un período prolongado, además de ser continua e ininterrumpida. Si bien la Constitución no especifica la extensión del período, el artículo 326° del CC sí lo hace, disponiendo como tiempo mínimo 2 años de convivencia. La permanencia estable evidencia su relevancia en cuanto es solo a partir de ella que se puede brindar la seguridad necesaria para el desarrollo adecuado de la familia”</i>²⁷. Respecto de la publicidad ha</p>

²⁶ G. MEDINA Y J. MENDELEWICZ, “Responsabilidad por Disolución del Concubinato”, en C. CALDERON PUERTAS y C. AGURTO GONZALES (Coords.), Observatorio de Derecho Civil. La Familia Volumen II, Motivensa, Lima 2010, p. 222

²⁷ STC EXP. N.º 06572-2006-PA, del 06 de noviembre del 2007, F.J. 18

Art 326 C.C.	Características	Significado
		señalado Vega Mere ²⁸ que la unión de hecho debe ser una unión notoria, publica, cognoscible por los terceros; de allí que la propia norma civil haga referencia a la “posesión de estado”. No debe ser oculta, clandestina, pues ello podría denotar que la situación de los convivientes podría encontrarse al margen de tales exigencias.
El primer párrafo del artículo 326 nos habla que la unión de hecho debe estar libre de impedimento matrimonial.	Inexistencia de impedimento matrimonial.	Cornejo Chávez ²⁹ manifestaba que lo que sí es evidente en todos los textos y propuestas es que la unión que de algún modo se ampara es solamente aquella que en doctrina se llama concubinato <i>stricto sensu</i> , es decir, la unión de hecho entre un varón y una mujer que podrían casarse legalmente, pues lo contrario sería inmoral y perjudicaría eventualmente legítimos derechos de terceros.

El segundo párrafo del artículo 326 del Código Civil, norma un requisito procesal para poder accederse al reconocimiento de las uniones de hecho propias, citando que la posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita. Tradicionalmente se ha dicho que esta exigencia está dada en la desconfianza que existe hacia la prueba testimonial, por eso es que se exige la presentación de prueba

²⁸ Y. VEGA MERE, Las Nuevas Fronteras del Derecho de Familia..., cit., p. 79

²⁹ H. CORNEJO CHÁVEZ, *Derecho Familiar Peruano...*, cit., p. 81

documental escrita, tales como las partidas de nacimiento de los hijos, constancias de convivencia, etc.

Sin embargo, nos adherimos a la postura doctrinaria que critica esta exigencia de prueba escrita, llamándola excesiva, pues como han señalado autores como Plácido Vilcachagua, la posesión constante es una relación familiar que se caracteriza por la oralidad o por la simple concurrencia de circunstancias de comportamiento que revelan su existencia, siendo la prueba testimonial la que asume mayor relevancia.

Castro Avilés³⁰, señalaba respecto de este principio de prueba escrita que desde el punto de vista constitucional, el Estado peruano tiene un compromiso con la igualdad material y la protección de los más vulnerables; por ello, el proceso del reconocimiento judicial de las uniones de hecho debe proteger a la parte más débil de la relación. Para ello, los jueces, deberán de aplicar el principio de socialización del proceso para lograr una decisión objetiva y materialmente justa. El proceso civil en razón a la naturaleza de los conflictos a tratar, impone al juez de familia a superar los formalismos y las meras cuestiones técnicas, reservando la confrontación como última ratio. Si lo que se pretende es eliminar el exceso del ritual y que el proceso tenga una estructura con componente flexibles, y que, por otro lado, el juez de familia tenga amplias facultades tuitivas para hacer efectivos los derechos, la exigencia del principio de prueba escrita para el reconocimiento judicial impide que se cumplan estos buenos propósitos.

El tercer párrafo del artículo 326 del Código Civil cita las causas por las que la unión de hecho llega a su fin, diciendo que la unión de hecho termina por:

- **Muerte:** Sea muerte natural o legal, la unión de hecho se extingue teniendo en consideración que la muerte pone fin a la persona, también se comprende por lo tanto a la declaración de muerte presunta, regulada en el artículo 63 del Código

³⁰ E. CASTRO AVILES, “El principio de prueba escrita para el reconocimiento judicial de la unión de hecho”, *Diálogo con la Jurisprudencia*, Tomo 195, Lima, 2014, p .34

Civil³¹, pues ésta produce los mismos efectos de la muerte natural.

- **Ausencia:** Tal y como citaba Varsi Rospigliosi³², el artículo 49 del Código Civil prescribe que transcurridos dos años desde que se tuvo la última noticia del desaparecido se puede solicitar la declaración judicial de ausencia. La desaparición de uno de los convivientes trae aparejada la extinción del elemento básico de la unión de hecho, la convivencia. La ausencia implica el estado por el cual no se localiza al concubino en su domicilio por el plazo de dos años, siempre y cuando antes haya sido declarada la desaparición del mismo.
- **Mutuo acuerdo:** En palabras de Calderón Beltrán³³, es la terminación del concubinato por acuerdo de voluntades de ambos convivientes, cuando los afectos llegan a su fin, cuando la convivencia no funciona, cuando la continuación de la vida en común ya no es posible, los concubinos pueden optar de forma bilateral, por dar fin a su unión. A diferencia de los consortes maritales, a los convivientes no se les ha sido impuesto ningún trámite judicial, municipal, o notarial, para disolver su unión. Sin embargo, la Ley 29560 de julio del 2010, ley que amplía la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, ha previsto que los convivientes pueden dejar constancia de haber puesto fin a su estado de convivencia y que el reconocimiento del cese de convivencia se inscribe en el Registro Personal. Peralta Andía³⁴ decía que en este caso no existe problema alguno, pero será conveniente que conste por escrito a fin de que haya certeza en la titularidad de los nuevos bienes que puedan adquirirse.

³¹ Artículo 63: “Procede la declaración de muerte presunta, sin que sea indispensable la de ausencia, a solicitud de cualquier interesado o del Ministerio Público en los siguientes casos:

1.- Cuando hayan transcurrido diez años desde las últimas noticias del desaparecido o cinco si éste tuviere más de ochenta años de edad.

2.- Cuando hayan transcurrido dos años si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El plazo corre a partir de la cesación del evento peligroso.

3.- Cuando exista certeza de la muerte, sin que el cadáver sea encontrado o reconocido”.

³² E. VARSI ROSPIGLIOSI, *Tratado de Derecho de Familia...*, cit., p. 428

³³ J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales, Personales...*, cit., pp. 64-65

³⁴ J. PERALTA ANDÍA, *Derecho de Familia en el Código Civil...*, cit., p. 145

- **Decisión unilateral:** Que se da cuando uno solo de los convivientes pone fin a la unión de hecho, es el típico caso del abandono del hogar convivencial por parte de uno de los concubinos, en la mayoría de los casos, el varón, esta causal de fenecimiento de la unión de hecho es la única que produce los efectos personales de las uniones de hecho.

6. LAS RELACIONES PERSONALES ENTRE LOS CONVIVIENTES

6.1. EL DERECHO DE ALIMENTOS:

Tal y como se ha citado, cuando la unión de hecho fenece por decisión unilateral, surgirán entonces los efectos jurídicos personales del concubinato, así el tercer párrafo del artículo 326 del Código Civil establece derechos para el conviviente abandonado, señalando que en este último caso, el juez puede conceder, a elección del abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales.

Calderón Beltrán³⁵ decía que tanto la indemnización como la pensión de alimentos, son excluyentes una de la otra, o se solicita una indemnización o se solicita una pensión alimenticia, no se pueden peticionar ambas. Además mientras que la pensión alimenticia es provisional y periódica, la indemnización se paga en un solo único y exclusivo momento.

Varsi Rospigliosi³⁶ señalaba que en una unión de hecho la vida se desarrolla de modo similar a la que sucede en el matrimonio, esto en virtud de la tesis de la apariencia del estado matrimonial, la cual nos explica que las uniones de hecho generan relaciones jurídicas entre sus miembros, no iguales, pero sí parecidas a las generadas en el matrimonio. Por ejemplo: deber de asistencia, de la que derivan los alimentos; deber de cohabitación; deber natural de fidelidad.

³⁵ J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales...*, cit., p. 152

³⁶ E. VARSI ROSPIGLIOSI, *Tratado de Derecho de Familia...*, cit., p. 415

Peralta Andía³⁷ citaba que “el Código Civil actual permite el derecho alimentario del concubino abandonado y sus requisitos son los siguientes: a) Existencia de una unión concubinaria propia por el tiempo y condiciones establecidas por la ley. b) Decisión unilateral del abandonante para poner fin a esta unión de hecho. c) Capacidad económica del concubino abandonante. d) Estado de necesidad del concubino abandonado. Se entiende que la acción solamente puede ser intentada sino se ha optado por la indemnizatoria y cuando el abandonado no tenga la capacidad económica ni este acostumbrado a solventar las necesidades ordinarias del hogar. Un problema que ha concitado interés es saber si los concubinos tienen o no derecho a los alimentos durante la convivencia”.

El Tribunal Constitucional³⁸ ha manifestado respecto del derecho alimentario de los concubinos que: *“sería una interpretación bastante constreñida de la Constitución el concebir que en una unión de hecho no exista, por ejemplo, obligaciones de cooperación o de tipo alimentaria. Contémplese sino la situación en que uno de los convivientes requiera los auxilios pertinentes del otro por caer enfermo. Más aun, no debe dejarse de observar que frente a la terminación de la unión, por decisión unilateral, la pareja abandonada puede solicitar indemnización o pensión alimenticia [art. 326 CC]. Es decir, frente a la dependencia económica generada, se deben plantear contextos jurídicos que viabilicen y materialicen el sentido material y concreto de la Constitución”*.

Vega Mere³⁹ decía asimismo que el legislador ordinario, que fue reticente y retrechero con las familias no conyugales, no pudo evitar reconocer que las parejas no casadas se unen para forjar una comunidad de vida, desde que el artículo 326 del Código Civil señala que la unión de hecho se decide para alcanzar finalidades cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Manifiesta además que si los concubinos establecen una relación marital estable, no encuentro escollo para entender que la pareja se debe asistencia, en la medida que su relación se forja para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, como dice el propio artículo 326. Y el socorro mutuo es uno de dichos deberes. Pero si nos detenemos a analizar el caso en concreto y particular del deber

³⁷ J. PERALTA ANDÍA, *Derecho de Familia en el Código Civil...*, cit., p. 147

³⁸ STC EXP. N.º 06572-2006-PA, del 06 de noviembre del 2007, F.J.22

³⁹ Y. VEGA MERE, *Las Nuevas Fronteras del Derecho de Familia...*, cit., pp. 83-87

alimentario, es probable que lleguemos a la primera de las contradicciones a las cuales me refería, pues dado que no existe norma o mandato especial, la conclusión es que los concubinos no están obligados a prestarse alimentos mientras conviven. Además, tampoco se encuentran comprendidos entre los obligados en el numeral 474 del Código Civil.

6.2. LA INDEMNIZACIÓN:

Para algunos autores la indemnización señalada en el artículo 326 del Código Civil, está básicamente referida al daño a la persona que padece el concubino abandonado, por lo tanto se estarían indemnizando conceptos como la frustración de un proyecto de vida convivencial y principalmente el daño moral, es decir la afectación a los sentimientos del abandonado sin causa justa, pues es evidente que todo abandono significará para el abandonado sufrimiento emocional. Otro sector de la doctrina, considera que la indemnización es propiamente dicha una indemnización compensatoria, es decir, aquella que busca equilibrar desigualdades económicas entre los convivientes luego de la ruptura de la unión de hecho, esta última básicamente se da cuando uno de los convivientes, generalmente la mujer, se dedica exclusivamente a labores domésticas y al cuidado de los hijos y el otro, no siendo partícipe de estas responsabilidades familiares, progresa profesional y económicamente, de tal manera que al romperse la convivencia, esta ama de casa es sorprendida ante el abandono físico y económico de su pareja, sin poder insertarse en el mercado laboral, ni profesional, debido a su falta de progresión, debiendo por lo tanto, indemnizarse esta pérdida de expectativas y el desequilibrio económico producido en esta conviviente por la ruptura abrupta de la convivencia.

Según Calderón Beltrán⁴⁰, la indemnización prevista en el artículo 326 del Código Civil a favor del concubino abandonado (en la mayoría de casos la mujer, quién es dejada sola con sus hijos por su pareja convivencial, conformando luego del abandono una familia monoparental), comprendería tanto la llamada indemnización compensatoria, como la indemnización resarcitoria por el daño personal padecido, partiendo estos conceptos del llamado principio constitucional de protección a la familia contenido en el artículo 4 de la Constitución de 1993, pues el objetivo de la indemnización no sólo sería mitigar el daño a

⁴⁰ J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales, Personales...*, cit., pp. 159-160

la persona padecido por el abandonado, sino además la protección de la familia monoparental surgida del mismo hecho del abandono.

Respecto del daño moral, señala Peralta Andía⁴¹ “que los requisitos para intentar la acción indemnizatoria por daño moral son: a) Existencia de una unión concubinaria propia por el tiempo y las condiciones establecidas por la ley. b) Decisión unilateral o arbitraria por parte de uno de ellos para poner fin a esta unión concubinaria. c) Existencia de un daño personal o moral en el abandonado. d) Relación de causalidad entre el acto responsable y el daño”.

7. LOS DERECHOS SUCESORIOS DE LOS CONVIVIENTES

En casi todas las sociedades occidentales se observa un decrecimiento del número de matrimonios mientras que, al tiempo, en todas aquellas se produce un incremento exponencial de las parejas de hecho, aunque existen grandes diferencias entre los países en cuanto a la proporción de las parejas no casadas con respecto a las casadas. Obviamente el legislador no puede permanecer mudo ante las evidencias de estos cambios sociales. Especialmente en cuanto hace referencia a los derechos para después de la muerte, es necesario dar una respuesta suficiente a la realidad social⁴².

El 17 de abril del 2013 fue publicada en el diario oficial El Peruano la Ley 30007, ley que modifica diversos artículos del Código Civil, entre ellos el artículo 326 referido a las uniones de hecho, para reconocer derechos sucesorios a los convivientes. Esta norma no es más que el viraje del legislador desde la óptica de la Constitución Política de 1979 y de la primigenia redacción del artículo 326 en el Código Civil de 1984 que estuvo inspirado en dicha Constitución, hacia los preceptos constitucionales en materia de familia de la vigente Constitución Política de 1993, que como antes hemos citado, ven a la unión de hecho como fuente generadora de familia.

⁴¹ J. PERALTA ANDÍA, *Derecho de Familia en el Código Civil...*, cit., pp. 146-147

⁴² P. DE BARRON ARNICHES, “*El reconocimiento de Derechos Sucesorios a las pareja de hecho en la experiencia española*”, *El Nuevo Rostro del Derecho de Familia*, Motivensa, Lima, 2014, 1ª ed., p. 211

Aguilar Llanos⁴³, decía que no cabe duda que la familia peruana, no se funda solo en el matrimonio, aun cuando ello es lo deseable, sino igualmente en uniones de hecho que se comportan como sociedades conyugales, pero que no tienen respaldo matrimonial. Estas familias cada vez van creciendo más; manifiesta además que diversos Códigos del Continente habían concedido el derecho hereditario a los concubinos, y el Perú, era uno de los países faltantes, en el reconocimiento de la herencia entre los integrantes de una unión de hecho. Ahora bien, ello se da en un contexto en el que el Tribunal Constitucional, órgano supremo interprete de la Constitución, venía emitiendo resoluciones y otorgando derechos diversos a los concubinos, en tanto que forman familia y merecen por lo tanto la protección del Estado, tal como lo reconoce el artículo cuarto de nuestra Carta Magna, derechos como reconocer las diferentes formas familiares (familias monoparentales, familias ensambladas, familias concubinarias); derechos pensionarios a favor del sobreviviente de la unión de hecho, cuando el compañero o compañera ha fallecido; derechos a no ser discriminados los hijos afines con los biológicos, cuando todos ellos vivan formando una nueva identidad familiar (familia ensamblada); el cambio que viene operando en nuestra sociedad, en la que se ha dejado de estigmatizar a estas, e incluso a los hijos habidos de estas parejas, en tanto que ahora son vistas como una situación parecida sino igual a las uniones matrimoniales, todo ello ha llevado a que, a través de esta ley, se conceda este derecho trascendente e importante de la herencia entre concubinos, en la medida que cumplan las exigencias legales.

Al brindarse derechos sucesorios a los convivientes, se ha hecho una especie de justicia para el o la concubina supérstite, pues era injusto que a pesar de haber compartido su vida durante muchos años con el causante, a pesar de haber compartido el lecho y habitación, proyectos de vida, asistencia mutua, cuidados en enfermedades, etc., se viera luego perjudicada al quedar excluida del patrimonio de su pareja.

Ahora la Ley 30007 señala los requisitos que deben cumplir los convivientes para acceder a la herencia de su pareja, así, sólo pueden acceder a ella las uniones de hecho que cumplan con los requisitos del artículo 326 que ya hemos desarrollado en este trabajo de investigación, es decir, sólo pueden acceder a ella las uniones de hecho propias; además

⁴³ B. AGUILAR LLANOS, *Manual de Derecho de Sucesiones*, Pacífico, Lima, 2014, 1ªed., pp. 202-208

esta ley exige que la unión de hecho se encuentre inscrita en el Registro Personal, lo cual puede hacerse a través del proceso no contencioso notarial o a través de proceso contencioso judicial. Aguilar Llanos⁴⁴, decía respecto de las uniones de hecho inscritas en el Registro Personal o reconocidas por la vía judicial, que se trata de una exigencia legal para gozar del derecho de herencia, que busca identificar a las uniones de hecho que hayan cumplido con los requisitos sustantivos para ser consideradas como tales, es decir, la comunidad de vida de dos o más años y la no existencia de impedimento matrimonial entre los concubinos. Ahora bien, al ocurrir el deceso del concubino o concubina, el sobreviviente debe tener inscrita en el registro personal la unión de hecho o la sentencia judicial que la haya reconocido.

El artículo 2 de la Ley 30007, establece un requisito adicional, pues además de exigirse que la unión de hecho cumpla con los requisitos del artículo 326 del Código Civil, establece que la unión de hecho debe encontrarse vigente al momento del fallecimiento de cualquiera de sus miembros, esto haciendo un símil analógico a la unión matrimonial, pues para que los cónyuges hereden, es necesario que a la muerte de alguno de ellos el matrimonio se encuentre vigente. Castillo Freyre⁴⁵ citaba que “cuando se reconozca la existencia de una unión de hecho, lo importante será, para fines sucesorios, que ella tenga más de dos años de antigüedad y que se encuentre vigente al momento del fallecimiento de uno de sus integrantes”. De otra parte, Aguilar Llanos⁴⁶, criticaba este requisito, manifestando que “este trato nos puede llevar a serias injusticias, pues puede darse casos, de parejas concubinarias con reconocimiento o inscripción, pero que sin culpa del concubino sobreviviente, no se encontraban viviendo juntas cuando ocurre el deceso, en esa situación, no podría heredar, si aplicamos el texto frío de la norma. Por ello, creemos que la interpretación de la norma debe ser extensiva para comprender estos casos. Creemos que lo que busca la norma es proteger a estas parejas concubinarias, mediante el reconocimiento del derecho sucesorio, en tanto que han probado esta unión de hecho, independientemente de que al ocurrir el deceso del causante, estén viviendo juntas o no, salvo el caso comprobado de abandono, supuesto en el cual, los interesados tienen el

⁴⁴ B. AGUILAR LLANOS, *Manual de Derecho de Sucesiones...*, cit., p. 207

⁴⁵ M. CASTILLO FREYRE, “La sucesión en las uniones de hecho”, *El Nuevo Rostro del Derecho de Familia*, Motivensa, Lima, 2014, 1ª ed.p.109

⁴⁶ *Ibíd*em, p. 206

derecho de acudir a la vía judicial para impugnar el reconocimiento de esa unión de hecho, y no solo por el abandono, sino por cualquier otra causa de indignidad o desheredación que aparte al posible sucesor de la herencia”.

La Ley 30007 incorpora el siguiente párrafo al artículo 326 del Código Civil: *“Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo producen, respecto de sus miembros, derechos y deberes sucesorios, similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en los artículos 725, 727, 730, 731, 732, 822, 823, 824 y 825 del Código Civil se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos en que se aplicarían al cónyuge”*.

Es decir que en nivel de paridad, en la actualidad se reconocen a los integrantes sobrevivientes de una unión de hecho, exactamente los mismos derechos sucesorios que el Código Civil reconoce a los cónyuges.

Entre estos derechos hoy los concubinos tienen el derecho de habitación vitalicia normado en el artículo 731 del Código Civil⁴⁷, por el cual al morir el causante se impide la partición de la casa u hogar común por parte de los sucesores, protegiendo con esto al sobreviviente de quedarse sin habitación.

Los concubinos tienen el derecho de usufructo señalado en el artículo 732 del Código Civil⁴⁸, respecto de este derecho manifestaba Calderón Beltrán⁴⁹, que la norma permite al cónyuge o concubino sobreviviente arrendar el bien sobre el cual recae el derecho de habitación y percibir para sí la renta, dicho acto deberá de realizarse con autorización

⁴⁷ **Artículo 731.- Derecho de habitación vitalicia del cónyuge supérstite:**

Cuando el cónyuge sobreviviente concurra con otros herederos y sus derechos por concepto de legítima y gananciales no alcancen el valor necesario para que le sea adjudicada la casa-habitación en que existió el hogar conyugal, dicho cónyuge podrá optar por el derecho de habitación en forma vitalicia y gratuita sobre la referida casa. Este derecho recae sobre la diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por concepto de legítima y gananciales.

⁴⁸ **Artículo 732.- Derecho de usufructo del cónyuge supérstite**

Si en el caso del artículo 731, el cónyuge sobreviviente no estuviere en situación económica que le permita sostener los gastos de la casa-habitación, podrá, con autorización judicial, darla en arrendamiento, percibir para sí la renta y ejercer sobre la diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por concepto de legítima y gananciales los demás derechos inherentes al usufructuario. Si se extingue el arrendamiento, el cónyuge sobreviviente podrá readquirir a su sola voluntad el derecho de habitación a que se refiere el artículo 731.

⁴⁹ J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales, Personales...*, cit., pp. 191-192

judicial y siempre y cuando, que el sobreviviente no estuviese en la posibilidad económica de sostener los gastos que demande la casa-habitación, al extinguirse el arrendamiento, el sobreviviente podrá restablecer a su sola voluntad el derecho de habitación. Entendemos que la intención del legislador al establecer este derecho de usufructo, es similar a aquella que lo llevó a establecer el derecho de habitación, es decir, de carácter asistencial en beneficio del cónyuge o concubino sobreviviente, quien por alguna carencia económica, se encuentra impedido de solventar los gastos que exija la casa-habitación, el fin de la norma no sería otro que establecer un resguardo para el compañero sobreviviente necesitado, a fin de evitar que caiga en el desamparo.

Gracias a la Ley 30007, los concubinos al igual que los cónyuges concurren a la herencia con los hijos u descendientes de su pareja fallecida, heredando una parte igual a la de un hijo, esto de conformidad con el artículo 822 del Código Civil⁵⁰.

Los concubinos tienen asimismo la opción de usufructuar una tercera parte de la herencia, esto de conformidad con el artículo 823 del Código Civil⁵¹. Aguilar Llanos⁵², citaba que la norma está pensada, siempre privilegiando al cónyuge del causante y hoy también a la concubina viuda, favoreciendo al supérstite cuando la concurrencia con descendientes es numerosa; en esa situación si se decidiera continuar como heredera, su cuota llega a atomizarse; en tanto que, como ya quedó claro, su cuota es la de un descendiente del causante; por ejemplo, si la concurrencia se da con doce hijos del causante, entonces al cónyuge le corresponderá una treceava parte de la herencia; en ese supuesto, sería más provechoso gozar en calidad de usufructuario de la tercera parte del patrimonio hereditario.

Al igual como concurre con descendientes del causante, el concubino también posee el derecho de concurrencia a la herencia con los ascendientes del causante, heredando una parte igual a aquellos, de conformidad con el artículo 824 del Código Civil⁵³.

⁵⁰ **Artículo 822.- Concurrencia del cónyuge con descendiente**

El cónyuge que concurre con hijos o con otros descendientes del causante, hereda una parte igual a la de un hijo.

⁵¹ **Artículo 823.- Opción usufructuaria del cónyuge**

En los casos del artículo 822 el cónyuge puede optar por el usufructo de la tercera parte de la herencia, salvo que hubiere obtenido los derechos que le conceden los artículos 731 y 732.

⁵² B. AGUILAR LLANOS, *Unión de hecho y Derecho de Herencia*, Pacífico, Lima, 2014, 1ª ed., p. 145.

⁵³ **Artículo 824.- Concurrencia del cónyuge con ascendientes**

El artículo 825 del Código Civil⁵⁴, permite al concubino heredar exclusivamente, cuando el causante no posea descendientes, ni ascendientes.

La Ley 30007, también modifica el artículo 724 del Código Civil⁵⁵, para incluir como heredero forzoso del causante al integrante sobreviviente de la unión de hecho. Echeopar García⁵⁶, decía que la noción de heredero forzoso alude a parientes de cierto grado o de cierta línea, como los hijos y descendientes, ascendientes o cónyuge, personas a quienes es absolutamente necesario dejarles parte de la herencia.

Se modifican los órdenes sucesorios señalados en el artículo 816 del Código Civil, siendo el texto actual de este artículo 816 el siguiente: “*Son herederos del primer orden, los hijos y demás descendientes; del segundo orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho; del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad. El cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes indicados en este artículo*”. Bustamante Oyague⁵⁷, señalaba que por consiguiente, en el art. 816 del Código Civil se enuncian seis órdenes sucesorios de los herederos legales: en el 1ro. Los hijos y demás descendientes; 2do. Los padres y demás ascendientes; 3ro. El cónyuge sobreviviente o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho; 4to., 5to., y 6to. Los parientes consanguíneos colaterales de segundo, tercer y cuarto grado respectivamente. Si no hubieran herederos hasta el 6to. Orden de los contemplados en el citado art. 816, entonces los bienes pasan al Estado, quien es considerado sucesor de acuerdo al art. 830 del Código Civil. Como se aprecia en la norma citada, la ley peruana solo concibe seis órdenes sucesorios, en los

El cónyuge que concurra con los padres o con otros ascendientes del causante, hereda una parte igual a la de uno de ellos.

⁵⁴ **Sucesión exclusiva del cónyuge**

Artículo 825.- Si el causante no ha dejado descendientes ni ascendientes con derecho a heredar, la herencia corresponde al cónyuge sobreviviente.

⁵⁵ **Artículo 724.- Herederos forzosos**

Son herederos forzosos los hijos y los demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, el cónyuge o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho.

⁵⁶ L. ECHEOPAR GARCÍA, *Derecho de Sucesiones*, Gaceta Jurídica, Lima, 1999, p.127

⁵⁷ E. BUSTAMANTE OYAGUE, “*La Vocación Hereditaria del Conviviente Supérstite, El Nuevo Rostro del Derecho de Familia*”, Motivensa, Lima, 2014, 1ª ed., pp. 129-130

cuales se ubicarán los parientes, o cónyuges o, en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho, que sobrevivan al causante, y que tendrán vocación hereditaria respecto a aquél.

Asimismo en materia registral, la Ley 30007 incorpora un inciso al artículo 2030 del Código Civil, el inciso 10, señalando que se inscriben en el Registro Personal a las uniones de hecho inscritas en vía notarial o reconocidas por vía judicial. En palabras de Calderón Beltrán⁵⁸, este artículo viene a complementar, o mejor dicho, viene a enmendar una omisión de la Ley 29560, Ley que amplía la Ley 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, en efecto, el artículo 7 de la Ley 30007, expresamente establece que se inscribirán en el Registro Personal las uniones de hecho que se hayan inscrito en vía notarial y aquellas que hayan sido reconocidas por vía judicial, mandato legal obviado por la Ley 29560, que generaba inconvenientes en sede registral, pues no todos los registradores interpretaban que la inscripción registral de las uniones estables estaba tácitamente contenida en la Ley 29560, no faltando algunos de ellos, que manteniéndose apegados estrictamente al texto de la Ley, negaban la inscripción de las uniones de hecho, argumentando que éstas no estaban consideradas por el artículo 2030 del Código Civil como actos inscribibles. Con la incorporación brindada por el artículo 7 de la Ley 30007, se vienen a superar éstos inconvenientes.

Finalizando esta parte, es de tenerse presente que en nuestra realidad no se reconoce ninguna clase de derecho sucesorio a los concubinos que conforman una unión de hecho impropia, el legislador no se ha planteado esta posibilidad, sin embargo el tema, sí ha sido abordado en otras realidades como Brasil, al respecto decía Flaviana Rampazzo Soares⁵⁹ decía que “se tiene la posibilidad de que el conviviente fallecido haya mantenido su estado civil de casado, a pesar de ser separado de hecho de su cónyuge formal, y haber establecido posterior unión de hecho con el conviviente supérstite. El sistema jurídico brasileño reconoce la existencia de esa posibilidad y admite la ocurrencia de unión de hecho entre una persona con otra, separada de hecho. Reconociendo la existencia y la regularidad de la unión de hecho, así como la extinción del casamiento por ausencia de cohabitación, se

⁵⁸ J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales, Personales...*, cit., p.198

⁵⁹ F. RAMPAZZO SOARES, “La experiencia jurídica brasileña y los Derechos Sucesorios de las Uniones de Hecho”, *El Nuevo Rostro del Derecho de Familia*, Motivensa, Lima, 2014, 1ª ed., p. 253

sigue la regla del art. 1.790 del Código Civil, según la cual el conviviente supérstite tendrá derecho a parte de los bienes, o sea, aquellos que hayan sido adquiridos de forma onerosa en la constancia de la unión de hecho”.

CAPITULO II

LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE LA UNIÓN DE HECHO

1. EL RECONOCIMIENTO DE LAS UNIONES DE HECHO Y SU INSCRIPCION REGISTRAL

1.1. RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE LAS UNIONES DE HECHO

Antes de que se publicara la Ley 29560, que desde julio del 2010 amplió la competencia notarial en asuntos no contenciosos, permitiendo el reconocimiento de las uniones de hecho en instancias notariales, la única forma que existía para reconocer a este tipo de familias era el trámite del proceso contencioso ante el Poder Judicial.

El proceso contencioso generalmente es la vía que elige el concubino o concubina abandonada por su pareja, para reclamar sus derechos patrimoniales ante el fenecimiento de la unión de hecho por decisión unilateral, se recurre a esta vía cuando exista conflicto, es decir, cuando los concubinos no se encuentren de acuerdo respecto la existencia de la convivencia, ni respecto de sus derechos patrimoniales. Las principales características de este proceso, las resumimos de la siguiente forma:

- **Proceso Complejo:** Se considera complejo al proceso de reconocimiento de uniones de hecho, razón por la cual, de conformidad con el inciso 1 del artículo 475 del Código Procesal Civil⁶⁰, este se suele tramitar en la vía del proceso de conocimiento, es decir la vía más lata y que ofrece mayores

⁶⁰ **Artículo 475.- Procedencia**

Se tramitan en proceso de conocimiento, ante los Juzgados Civiles, los asuntos contenciosos que:

1. No tengan una vía procedimental, no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales y, además, cuando por su naturaleza o complejidad de la pretensión, el Juez considere atendible su tramitación.

garantías dentro de los procesos civiles. Díaz Cañote⁶¹, decía que el reconocimiento de la unión de hecho es tramitado vía proceso de conocimiento, para ello la demanda debe cumplir con los requisitos previstos en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, y la misma es interpuesta mayormente cuando uno de los conviviente decide abandonar al otro o cuando la unión de hecho ha concluido al fallecimiento de uno de los convivientes. En el primer supuesto, se hace necesario la adopción de las medidas cautelares, como la anotación de demanda, para evitar la disposición de los bienes que puede hacer el conviviente a nombre de quien se encuentran los mismos; y en el segundo supuesto, es muy usual que al no existir una sucesión intestada se nombre a un curador procesal, sin perjuicio de solicitarse al demandante señale quienes podrían integrar la misma.

- **Pretensión imprescriptible:** La Corte Suprema de Justicia a través de sus diversas sentencias, considera que la pretensión de reconocimiento de la unión de hecho, no se ve afectada por la prescripción extintiva, así han señalado los jueces supremos que: *“Ahora bien, encontrándose implícito en el artículo 5 de la carta Magna, que reconoce a la unión de hecho, el derecho humano a fundar una familia, la acción de reconocimiento de dicha acción no está sujeta a plazo prescriptorio, pues los derechos humanos son por su propia naturaleza imprescriptibles, según la Convención de Viena”*⁶²; manifestando también que: *“se advierte que la declaración de una unión de hecho, es el reconocimiento de una situación jurídica anterior existente, por ello, los efectos de su protección es de orden declarativo, mas no constitutivo, pues sus efectos se retrotraen hasta el momento de inicio de la unión, siendo ello así, la unión de hecho no puede ser afectada por la prescripción, a que hace referencia el artículo 2001 numeral 1 del Código Civil, pues de hacerlo implicaría negar el reconocimiento constitucional de institución fundamental, y negar a la vez un hecho jurídico de carácter familiar que ha tenido real y efectiva*

⁶¹ M. DÍAZ CAÑOTE, *La unión de hecho y los derechos sucesorios*, Actualidad Civil, Tomo 24, Junio, 2016, p. 107

⁶² Cas. N° 1532-2013-Lambayeque, considerando décimo primero.

existencia”⁶³. Calderón Beltrán⁶⁴, decía que si entendemos a la unión de hecho como un derecho fundamental de la persona, que duda cabe que ostenta esa calidad de derecho fundamental, al estar regulado por los artículos 4 y 5 de la Constitución Política vigente, si entendemos que este derecho fundamental guarda estrecha relación con el derecho humano que posee toda persona, a fundar una familia, es por ello que insistentemente se viene reconociendo a la unión de hecho como fuente generadora de familia, que merece la más alta protección del Estado y la Comunidad, es que concluiremos que la acción para el reconocimiento de esta tipología familiar, no podría ser afectada por la prescripción extintiva. Adicionalmente, el fundamento de la denominada imprescriptibilidad para el reconocimiento judicial de una unión de hecho no radica solamente en su naturaleza constitucional, sino que dicho reconocimiento es una acción meramente declarativa de derechos, existen supuestos de imprescriptibilidad que no han sido establecidos de manera expresa por la ley (imprescriptibilidad atípica), como sucede, por ejemplo, con las acciones de declaración, entre ellas la de mejor derecho de propiedad, la acción de prescripción adquisitiva de dominio, entre otras⁶⁵.

- **Sentencia declarativa de derechos:** La sentencia que se emite en esta clase de procesos judiciales, es propiamente una sentencia declarativa de derechos, es decir, no modifica una relación jurídica existente, ni constituye una nueva relación jurídica, sino que simplemente viene a reconocer la existencia de una relación jurídica. Mosquera Vásquez⁶⁶, decía que en un proceso de reconocimiento de unión de hecho, la sentencia expedida es declarativa de derechos (se limita a declarar o negar la existencia de una situación jurídica) y no constitutiva (crea, modifica o extingue una situación jurídica), toda vez que la sentencia que se expida solamente reconoce que la

⁶³ Cas. N°1025-2011-Lima Norte, considerando quinto.

⁶⁴ J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales, Personales...*, cit., pp. 237-238

⁶⁵ P. HERRERA ARANA Y M. TORRES MALDONADO, “La imprescriptibilidad del reconocimiento de la unión de hecho y la prescriptibilidad de la liquidación de la comunidad de bienes”, Gaceta Civil, Tomo 38, Lima, 2016, p. 47

⁶⁶ C. MOSQUERA VASQUEZ, *En unión de hecho la sentencia no es constitutiva*, Diálogo con la Jurisprudencia, Tomo 176, Mayo, 2013, p. 71

convivencia de la pareja ha venido dándose durante un periodo determinado. Varsi Rospigliosi⁶⁷, decía que a nuestro juicio la sentencia que declara o reconoce la existencia de una unión de hecho debe tener carácter retroactivo al momento del origen de esta unión intersexual. Vale decir, cuando cumple los requisitos para ser una unión de hecho propia, los efectos jurídicos de la sentencia tienen carácter declarativo y no constitutivo, consagrando la existencia de una situación jurídica preexistente, y consecuentemente, se incluya la tutela de sus efectos jurídicos al periodo comprendido entre el inicio de la unión y la emisión de la sentencia judicial. A pesar de la posición que consideramos es la más pertinente, existen jurisprudencias donde indirectamente se establece que la sentencia de reconocimiento de la unión de hecho no es retroactiva, situación con la cual nos encontramos disconformes.

- **Se rige bajo el principio de prueba escrita:** Tal y como hemos señalado cuando analizábamos el artículo 326 del Código Civil, la posesión constante de estado de los concubinos se prueba cumpliéndose con el requisito de prueba escrita, cumplen este requisito a aquellos documentales que emanan de las partes, ejemplo: escritos, contratos, partidas de nacimiento de los hijos, etc. Muchos autores como Plácido Vilcachagua, han criticado a esta exigencia de la norma, llamándola excesiva, no encontrando razones suficientes para que se desmerezca a la prueba testimonial. Cárdenas Rodríguez⁶⁸, manifestaba que sería beneficiosa la asunción de una actitud más abierta en términos probatorios, pues no hay que olvidar que estas uniones configuran una relación familiar, caracterizada por la confianza mutua y el comportamiento correspondiente al de una pareja estable, y que no siempre será posible contar con un documento para hacer valer su existencia. Díaz Cañote⁶⁹, ha dicho que se debe tener cuidado de señalar en la demanda y acreditarse cuándo se inició la unión de hecho y cuando culminó, pues la sociedad de bienes necesita acreditación de que la unión de

⁶⁷ E. VARSI ROSPIGLIOSI, *Tratado de Derecho de Familia...*, cit., p. 420

⁶⁸ L.CÁRDENAS RODRÍGUEZ, *Elusión del principio de prueba escrita en la unión de hecho*, Diálogo con la Jurisprudencia, Tomo 181, Lima, 2013, p. 137

⁶⁹ M. DÍAZ CAÑOTE, *La unión de hecho y los derechos sucesorios...*, cit., pp. 107-108

hecho haya durado cuando menos dos años continuos, por otro lado, no olvidemos que aunque el artículo 197 del Código Procesal Civil nos señale que todos los medios probatorios serán evaluados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada al expedir sentencia, lo cierto es que podemos tener el inconveniente de encontrarnos con algún magistrado, que pueda señalarnos que conforme al segundo párrafo del artículo 326 del Código Civil, la posesión constante de estado a partir de la fecha aproximada puede probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un principio de prueba escrita, por tanto, no está de más que se recurra a la documentación que acredite que los convivientes compartieron el mismo domicilio, el mismo lecho y la misma mesa, para lo cual entre otros medios de prueba escrita, nos ayudará el registro documentado del domicilio consignado en el Registro Nacional de Estado Civil (RENIEC), la matrícula realizada por el conviviente en el Colegio de los hijos, el registro de alguna aseguradora, los recibos de servicios públicos consignando el domicilio, son en todo caso, elementos más contundentes que fotografías o declaraciones testimoniales. Al final todos estos medios probatorios serán evaluados por el juez en forma conjunta.

Ahora, a diferencia de los efectos jurídicos personales que no requieren de un proceso judicial previo; para reconocerse efectos jurídicos patrimoniales a los concubinos, es necesario que previamente exista una sentencia judicial o una escritura pública que declare la existencia de la unión de hecho propia.

Calderón Beltrán⁷⁰, nos ilustra al respecto diciendo que la razón de establecer tal diferencia, estaría dada en la naturaleza de los derechos reclamados, así tratándose de los efectos personales, los derechos reclamados (alimentos e indemnización), exigirían una tutela urgente de parte del órgano jurisdiccional; en cambio, tratándose de los efectos jurídicos patrimoniales, es decir de la comunidad de bienes convivencial, es indispensable que previamente se acredite plenamente la

⁷⁰ J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales, Personales...*, cit., p. 243

existencia de la unión de hecho y el cumplimiento de los requisitos legales para conformarse un concubinato propio, a fin de cautelar los intereses de terceros que contraten con los miembros de la unión de hecho y a fin de favorecerse el tráfico y la seguridad jurídica.

Varsi Rospigliosi⁷¹, decía que una interrogante que encuentra diversas respuestas es si se requiere, adicionalmente a la prueba, que los convivientes inicien un proceso judicial y obtengan sentencia que reconozca dicha unión. Nuestra legislación no ha establecido tal requerimiento de manera explícita. Un amplio sector de la doctrina y jurisprudencia considera, en lo que respecta a los efectos personales exigidos entre los concubinos, que dicha unión no merece reconocimiento judicial en proceso previo, sino que en el mismo proceso, tal es el caso por ejemplo cuando uno de los convivientes le reclame al otro una pensión de alimentos o una indemnización en razón del abandono unilateral e injustificado del otro.

De otra parte señala este mismo autor⁷², que existe consenso doctrinal por el cual especialistas en Derecho de Familia consideran que, para reclamar los efectos patrimoniales de la unión de hecho, es necesario que previamente exista un reconocimiento judicial del estado de convivencia. Bajo estas consideraciones es que se opina que del tenor del segundo párrafo del artículo 326 del Código Civil puede colegirse que la unión de hecho es aquella que mereció calificación judicial dentro del proceso correspondiente y que mientras no se pruebe, únicamente puede alegarse que existe posesión constante de estado. Asimismo Alex Plácido participa de este pensamiento y menciona, con relación a los efectos patrimoniales, que se reclamen entre los convivientes o frente a terceros, como son los derechos que les corresponden de conformidad con el régimen de sociedad de gananciales, que la prueba de la existencia de la unión de hecho se requiere en forma previa al ejercicio de tales pretensiones; por lo que debe efectuarse un proceso distinto y anterior. Este criterio también se sustenta en la naturaleza de las pretensiones que se reclaman y por la seguridad jurídica necesaria para evitar perjuicios a terceros. Esto encuentra razón en algo simple, la existencia de la unión de hecho se trasluce en una incertidumbre jurídica y la única forma de despejar dicha incertidumbre es

⁷¹ E. VARSİ ROSPIGLIOSI, *Tratado de Derecho de Familia...*, cit., pp. 417-418

⁷² *Ibíd*em, pp. 418-419

acudiendo al juez. A pesar de estos considerandos doctrinarios y jurisprudenciales comentados, no consideramos justo ni acorde con los principios procesales esperar el reconocimiento de la unión de hecho en otro procedimiento para luego pretender solicitar tutela judicial de la otra pretensión de naturaleza patrimonial. En nada contraría o vulnera derechos procesales, como la tutela judicial o debido proceso legal, optar por acumulación de pretensiones. Ello pudiera dar lugar a que los justiciables, en la mayoría de los casos, abduquen a sus derechos de carácter pecuniario. En relación a los terceros, en caso de que pretendan reclamar un derecho patrimonial por parte de los concubinos, tampoco consideramos que sea menester el reconocimiento judicial en un proceso previo, sino en el mismo proceso judicial que se trate.

Nos adherimos a esta última postura expresada por el profesor Varsi Rospigliosi, siendo que en un solo proceso, perfectamente se pueden acumular las pretensiones de reconocimiento de unión de hecho y al mismo tiempo las pretensiones patrimoniales, lo cual redundaría en beneficio de tiempo y ahorro para los litigantes y para el propio Poder Judicial, además estas pretensiones son conexas y no vienen a ser contrarias entre sí, por lo que su acumulación es permisible.

Creemos asimismo que habiendo guardado silencio el legislador respecto de la naturaleza de la pretensión discutida en este clase de procesos y respecto de la acumulación de pretensiones planteada en este párrafo, lo cual ha llevado a diversas interpretaciones a la doctrina y a la jurisprudencia, es que a fin de salvaguardar los derechos patrimoniales de los concubinos debería ampliarse el artículo 326 del Código Civil, estableciéndose expresamente que la acción de reconocimiento de las uniones de hecho es de tipo declarativa y que al proceso de reconocimiento de uniones de hecho se le pueden acumular las pretensiones patrimoniales como consecuencia de la generación de la sociedad de bienes convivencial.

1.2. RECONOCIMIENTO NOTARIAL DE LAS UNIONES DE HECHO

El 15 de julio del 2010 se promulgó la Ley 29560, Ley que amplía la competencia notarial en asuntos no contenciosos, permitiendo que las uniones de hecho sean reconocidas en vía notarial.

Calderón Beltrán⁷³, decía que la norma nació como una iniciativa de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, enviada al Legislativo por el Colegio de Notarios del Callao. Esta norma nacida desde la propia iniciativa del notariado, en palabras de sus presentadores, busca un ahorro de tiempo y una agilización de trámites para los miembros de una unión de hecho, lo cual es evidente, pues permite a los convivientes acceder mediante un trámite notarial simple, a una escritura pública que para ellos cumpla el rol de partida o acta que ponga de manifiesto su estado de convivencia, aliviando también la carga procesal del Poder Judicial, pues antes de publicarse esta ley, la única forma en que se podía reconocer al concubinato era a través de un complejo y dilatado proceso judicial. Terminando esta parte debemos citar, que al igual como ha sucedido con otras materias de Derecho de Familia, como es el caso de la separación convencional, la ampliación de la competencia notarial en el tema de reconocimiento de uniones de hecho, es en cierta forma beneficiosa para aquellos concubinos que concertadamente pretendan brindar mayor estabilidad a su unión, al brindarles un procedimiento simplificado que les significará un ahorro de tiempo, de dinero y de esfuerzos.

Díaz Cañote⁷⁴, explicándonos el procedimiento notarial, decía que la citada norma establece el procedimiento para obtener el reconocimiento de la unión de hecho a nivel notarial, el mismo que se resume de la siguiente forma: solicitud de ambos convivientes pidiendo que se reconozca e inscriba en el registro personal su unión de hecho, acompañando los documentos pertinentes que acrediten tal unión por los menos dos años de manera continua y dos testigos que den fe de ello, que se encuentran libres de impedimentos matrimoniales y que ninguno tiene vida en común con otro varón o mujer, según sea el caso, para lo cual se requiere del

⁷³ J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales, Personales...*, cit., pp. 171-172

⁷⁴ M. DÍAZ CAÑOTE, *La unión de hecho y los derechos sucesorios...*, cit., p. 107

certificado domiciliario, y del certificado negativo de la unión de hecho. Este reconocimiento notarial requiere del acuerdo entre los convivientes para el reconocimiento de la unión de hecho, por tanto, no es factible dicho reconocimiento de manera unilateral, para ello será necesario recurrir a la vía judicial.

El mismo autor⁷⁵, dice que el notario manda a publicar la solicitud; la cual transcurridos los 15 días útiles desde la publicación del último aviso y de no haber oposición, el notario levanta el acta con el reconocimiento de la unión de hecho y remite los partes al registro personal para su inscripción; de existir oposición, el procedimiento notarial se interrumpe y se derivará lo actuado al juez especializado de familia o mixto como corresponda. Finalmente, si los convivientes desean dejar constancia de haber puesto fin a su estado de convivencia, podrán hacerlo en la escritura pública en la cual podrán liquidar el patrimonio social, siendo que dicho reconocimiento de cese de la convivencia se inscribirá en el Registro Personal.

Veamos en el siguiente cuadro resumen las principales diferencias y similitudes entre el reconocimiento judicial y el reconocimiento notarial de las uniones de hecho:

⁷⁵ M. DÍAZ CAÑOTE, *La unión de hecho y los derechos sucesorios...*, cit., p. 107

Reconocimiento Judicial	Reconocimiento Notarial
<ul style="list-style-type: none"> • Se inicia de forma unilateral: el conviviente abandonado o supérstite demanda el reconocimiento de la unión de hecho. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se inicia de forma bilateral: ambos convivientes acuden de forma conjunta a la vía notarial para iniciar el trámite de reconocimiento de la unión de hecho.
<ul style="list-style-type: none"> • Es un trámite contencioso: sólo se recurre a esta vía cuando haya conflicto con el otro conviviente o con los sucesores de éste, conflicto que se origina, respecto de la existencia de la unión de hecho y respecto de los derechos patrimoniales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es un trámite no contencioso: aquí no hay conflicto, ambos convivientes por voluntad propia acuden a la notaria para dejar constancia de la existencia de su unión, e incluso para dejar constancia del cese de la convivencia, pudiendo de forma concertada liquidar el patrimonio social.
<ul style="list-style-type: none"> • Exigencia del principio de prueba escrita: la norma establece que la posesión constante de estado de los convivientes se prueba con cualquier medio probatorio siempre que se cumpla con el principio de prueba escrita. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prueba escrita y prueba testimonial: A efectos de acreditar la unión de hecho se exigen documentos que cumplen con el principio de prueba escrita, como declaraciones juradas, certificados domiciliarios, certificado negativo de unión de hecho; pero también es exigible la prueba testimonial, requiriéndose en este procedimiento la presencia de dos testigos.
<ul style="list-style-type: none"> • Unión de hecho propia: Sólo se puede demandar el reconocimiento de la unión de hecho propia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unión de hecho propia: sólo se puede reconocer en vía notarial la existencia de una unión de hecho propia.
<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción en el registro personal: la sentencia que reconoce a la unión de hecho se inscribe en el registro personal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inscripción en el registro personal: la escritura pública con la declaración del reconocimiento de la unión de hecho se inscribe en el registro personal.

1.3. INSCRIPCIÓN REGISTRAL DE LAS UNIONES DE HECHO

Como antes hemos citado en este trabajo, el fin del reconocimiento judicial y notarial de las uniones de hecho, no es otro que inscribir a la unión de hecho en el Registro Personal, es decir, publicitar en los Registros Públicos la existencia de la unión de hecho a toda la sociedad en general, teniendo en cuenta que conforme lo establece el artículo 2012 del Código Civil –Principio de Publicidad Registral- se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones; es decir, mediante esta presunción iure et de iure, nadie puede alegar desconocimiento de lo que se encuentra inscrito. La inscripción de las uniones de hecho es un acto de formalización de estas formas de familia, en ese sentido citaba Amado Ramírez⁷⁶ que “formalizar esa unión de hecho propia en el Perú, no podría ser de otra forma que lograr su reconocimiento oficial a través del órgano de jurisdicción u optativamente por la vía notarial, y su consecuente inscripción en el registro personal respectivo. Consideramos, que ya basta de apoyar y defender lo clandestino o lo oculto, sino más bien, debemos de preocuparnos porque las uniones de hecho se conviertan conocidas, públicas y oponibles”.

Tratándose de uniones de hecho, la publicidad juega un rol muy importante, tanto para los convivientes como para los terceros que contraten con ellos, sobretodo desde el punto de vista patrimonial, pues mediante una publicidad adecuada de la unión de hecho, nadie podría alegar que desconoce la calidad social de un bien adquirido por los convivientes, evitándose así que se venda una casa o un vehículo como bien propio, cuando en realidad es social.

Calderón Beltrán⁷⁷, decía que los fines mediatos de normas como las que permiten el reconocimiento de las uniones de hecho en sede notarial y que son extensivas a la inscripción registral de las uniones de hecho, son:

⁷⁶ E. AMADO RAMIREZ, “Un vistazo a la unión de hecho en el Perú. Regulación normativa y su relación con los derechos patrimoniales”, Gaceta Civil, Tomo 38, Lima, 2016, p. 85

⁷⁷ J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales, Personales...*, cit., pp. 172-173

- **Otorgar publicidad a las uniones de hecho:** Era importante brindar publicidad a las uniones estables, pues a través de ésta se busca alcanzar la seguridad jurídica necesaria, favoreciendo el tráfico jurídico patrimonial del cual sean partícipes las uniones de hecho.
- **La protección de los derechos patrimoniales de los miembros de una unión estable:** A través del reconocimiento de la unión de hecho y de la publicidad que le otorga la norma, podrá establecerse la calidad social o propia de los bienes adquiridos durante la convivencia, evitando que se transfieran o que se graven como propios a bienes sociales y permitiendo a los convivientes oponer la existencia de la unión estable a terceros.
- **La protección de los terceros que contraten con la convivencia more uxorio:** Creando un clima de certeza, de certidumbre y de confianza a aquellos que contraten con los miembros de una unión estable, a quienes nos les quedará dudas respecto de la calidad social o propia de los bienes objeto de contrato y respecto de los titulares de dichos derechos.

En materia de publicidad se han hecho importantes avances normativos, permitiendo en la actualidad la inscripción de las uniones de hecho en el Registro Personal, inscripción que vendría a ser una especie de partida de matrimonio para este tipo de uniones.

Sin embargo, aun existen derechos no reconocidos a los convivientes que podrían ayudarnos en este tema de publicidad, pues mientras más publicitada se encuentre la unión de hecho, mayor seguridad tendrá el patrimonio de los convivientes, así en doctrina se afirma que los convivientes también deberían tener derecho a un nuevo estado civil que obviamente conste en los datos de RENIEC (que son datos públicos) y en su documento nacional de identidad, el estado civil de conviviente que se sumaría a los ya existentes estados civiles de de casado y soltero. Así, haciendo nuestras las ideas de Díaz Cañote⁷⁸, éste nos decía que la unión de hecho debería generar el establecimiento de un nuevo estado civil, el de conviviente y con ello un nuevo tipo de parentesco, lo que en el Derecho

⁷⁸ M. DÍAZ CAÑOTE, *La unión de hecho y los derechos sucesorios...*, cit., pp. 108-109

Canónico se denomina como derecho de cuasi-afinidad. Un primer avance al respecto, se estableció con la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar cuando se señalaba en el artículo 2 del Decreto Supremo Nro. 006-97-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley 26260, lo siguiente: *“A los efectos de la presente Ley, se entenderá por violencia familiar, cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como la violencia sexual, que se produzcan entre: j) Uno de los convivientes y los parientes del otro hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en las uniones de hecho”*. Con la incorporación de este último inciso que se realizó mediante el artículo 1 de la Ley Nro. 29282, del 27 de diciembre del 2008, se reconocía la posibilidad de que se produzca violencia familiar (física y/o psicológica), entre uno de los convivientes y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de su conviviente, y con ello, el reconocimiento de un nuevo estado civil, el de conviviente, y un nuevo tipo de parentesco. La reafirmación de lo indicado por la derogada Ley Nro. 26260 modificada por la Ley Nro. 29282, se ha realizado cuando la vigente Ley Nro. 30364 del 23 de noviembre del 2015, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, indica en el inciso b) del artículo 7, que son sujetos de protección de la referida Ley, los miembros del grupo familiar, entendiéndose como tales a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes, padrastros y madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Beltrán Pacheco⁷⁹ decía que “Hoy en día, las uniones de hecho, los derechos y consecuencias que surgen de ellas, han sido reconocidas en un nivel superior, buscándose en la doctrina y en la jurisprudencia equiparar la relación convivencial estable con la relación conyugal, tan es así de cierto, que aquel reconocimiento voluntario que realizan los convivientes ante un notario y que posteriormente se inscribe en los Registros Públicos, a nuestro parecer sustituye a una partida de nacimiento inscrita en el Registro Civil, por lo que nos preguntamos: ¿qué esperan los legisladores para incorporar al estado de conviviente entre los estados civiles? Creo al respecto, ya es hora de evolucionar y de evitar tratamiento desigual entre los iguales”.

⁷⁹ P. BELTRÁN PACHECO, “El régimen patrimonial de las uniones de hecho. Cuando lo que ley establece no es suficiente”, Gaceta Civil, Tomo 38, Lima, 2016, p. 28

Ahora para que los convivientes logren inscribir un bien social en los registros públicos, el registrador exigirá previamente que se le demuestre la existencia de la unión de hecho propia, es decir de la escritura pública o la sentencia judicial que declare la existencia de esta unión de hecho, en ese sentido, tenemos como referencia a la Resolución N° 011-2003-SUNARP-TR-L de 10 de enero de 2003 comentada por Salvatierra Valdivia⁸⁰, citándose que en la precitada resolución del Tribunal Registral se pidió la inscripción, con la calidad de social, de la adquisición de un bien por parte de una unión de hecho (termino atribuido por los propios adquirentes) y, en el que no se acreditó la existencia de declaración judicial de reconocimiento de la unión de hecho. En la calificación registral efectuada por el registrador - a decir de la autora - no resulta posible verificar el cumplimiento de “todos” los requisitos necesarios para la existencia de la unión de hecho. En consecuencia, para inscribir la adquisición de un bien en calidad de bien social, a nombre de una unión de hecho, deberá presentarse al Registro la resolución judicial que reconozca la existencia de la unión de hecho y que origina una sociedad de bienes a la que son aplicables las reglas del régimen de sociedad de gananciales.

⁸⁰ G. SALVATIERRA VALDIVIA, *A Propósito de la adquisición de bienes por las uniones de hecho*. Diálogo con la Jurisprudencia, Numero 86, Lima, 2005, pp. 247-253.

2. EL RÉGIMEN PATRIMONIAL DE LAS UNIONES DE HECHO

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD O COMUNIDAD DE BIENES CONVIVENCIAL:

Antes de que se promulgará la Constitución de 1979 que por primera vez reconoció a los convivientes derechos patrimoniales, los concubinos se encontraban en una absoluta ambigüedad legal, no existía ninguna norma que los reconozca como tales y menos que les otorgue derechos de alguna clase, por lo que se sucedían injusticias, sobretodo con las mujeres, pues era común que luego de convivir por un tiempo, el hombre la abandonará a su suerte, apropiándose de los bienes que habían acopiado durante la convivencia, esto a pesar de que la mujer había contribuido a la adquisición de esos bienes sea a través de aportes económicos o a través de labores dentro el hogar, como el cuidado y crianza de los hijos; a fin de superarse estas injusticias, es que la Constitución de 1979 les reconoció a estos convivientes la llamada comunidad de bienes o sociedad de bienes, el fin era evitar perjuicios al conviviente abandonado, permitiéndoles ser parte u ostentar derechos sobre los bienes que se hubieran adquirido durante la convivencia. Esta comunidad de bienes tuvo continuidad en el Código Civil de 1984 y luego en la Constitución Política de 1993.

Siguiendo la tesis de apariencia matrimonial, es que la voluntad del legislador fue otorgar a las uniones de hecho propias, un régimen patrimonial similar a la sociedad de bienes gananciales matrimonial, es por ello que el artículo 326 del Código Civil norma que: “ La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos dos años continuos”. Ha quedado establecido que el concubinato al que la ley le concede efectos jurídicos en el ámbito patrimonial, es el concubinato regular, o estricto, a ellos, la ley (artículo 326 del Código Civil) los protege equiparando la sociedad de bienes que se origina en su unión de hecho con la sociedad de gananciales, equiparar significa equivalencia, entendiéndose igualdad en el trato legal. En este caso esa sociedad de bienes es equivalente o igual a la sociedad de gananciales, lo que implica que la normativa que

regula a ésta última, debe ser aplicada a la sociedad de bienes generada en la unión de hecho⁸¹.

Mella Baldovino⁸², citando al Tribunal Constitucional, decía que no es indispensable que exista matrimonio para que se configure el régimen de sociedad de gananciales, las uniones estables se hallan bajo dicho régimen por mandato legal.

Calderón Beltrán⁸³, nos decía que a pesar de utilizarse dos denominaciones distintas, el tratamiento jurídico que se le brinda al régimen patrimonial del concubinato según el propio texto de ambas leyes, es el de la “*Sociedad de Gananciales Matrimonial en cuanto sea aplicable*”. Dogmáticamente la norma ha brindado a la comunidad de bienes convivencial, la misma naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales matrimonial.

Dentro de las principales características que podemos mencionar de la comunidad de bienes de las uniones de hecho, señalamos las siguientes:

- **Mancomunidad de Bienes:** Tal y como sucede con la sociedad de gananciales matrimonial, la comunidad o sociedad de bienes de los convivientes se trata de una auténtica mancomunidad de bienes, no es una copropiedad, porque los bienes adquiridos no se encuentra subdivididos en cuotas alícuotas, los bienes sociales pertenecen a la comunidad de bienes y a no así por partes iguales a los convivientes, recién cuando el concubinato desaparezca es que los convivientes procederán a liquidar y a repartirse este patrimonio social.
- **Régimen patrimonial forzoso:** Lo cual quiere decir que por mandato de la ley, los convivientes se someten al régimen patrimonial de comunidad o sociedad de bienes, no existe posibilidad de que ellos varíen su régimen patrimonial, ni de que opten por el régimen patrimonial de separación de

⁸¹ B. AGUILAR LLANOS, “*Régimen patrimonial de las uniones de hecho*”, Gaceta Civil, Tomo 38, Lima, 2016, pp.16-17

⁸² A. MELLA BALDOVINO, *La unión de hecho en el Perú y su desarrollo normativo, Estudios críticos sobre el Código Civil*, Gaceta Jurídica, Lima, 2014, 1ª ed., p. 711

⁸³ J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales, Personales...*, cit., p. 99

patrimonios, al cual sí tienen acceso los cónyuges. Mella Baldovino⁸⁴, nos explicaba esta situación diciendo que el régimen patrimonial de la “unión de hecho”, es único y forzoso; es decir, que no cabe la posibilidad de los concubinos de optar por un régimen patrimonial distinto al de la sociedad de gananciales (no se puede elegir el régimen de separación de patrimonios), de ser el caso que se cumpla dos años de convivencia y los demás requisitos previstos por ley. En efecto, no existe la facultad de los convivientes de elegir u optar por un determinado régimen patrimonial (como sí lo pueden realizar los cónyuges con sujeción al artículo 295 del Código Civil), siendo su única alternativa patrimonial la del régimen de sociedad de gananciales “en cuanto le fuere aplicable”, siempre que la convivencia haya durado por lo menos dos años continuos y cumpla con los requisitos de ley. Sin embargo cabe señalar que esta sociedad puede contener bienes propios y bienes sociales. En tal supuesto, los frutos de los bienes propios generan rentas sociales, tal cual sucede en un matrimonio que se rige por el régimen de sociedad de gananciales. Plácido Vilcachagua⁸⁵, decía que por cuanto el régimen patrimonial de la unión de hecho es único y forzoso; no pudiendo los convivientes sustituir la comunidad de bienes impuesta por la ley, durante la vigencia de la vida en común. El carácter único y forzoso del régimen patrimonial de las uniones de hecho propias, que se ha indicado, también ha sido advertido por el Tribunal Registral cuando los convivientes han pretendido inscribir acuerdos de separación de patrimonios, manteniendo la convivencia.

- **Se rige por la sociedad de gananciales en cuanto le fuere aplicable:** Esto quiere decir que en cuanto fuere aplicable, las normas que rigen a la sociedad de gananciales conyugal, se aplican analógicamente y extensivamente a la comunidad de bienes de las uniones de hecho, esto se ha establecido bajo la tesis de la apariencia matrimonial, por cuanto los convivientes han optado por esta unión para alcanzar las finalidades y cumplir deberes semejantes al

⁸⁴ A. MELLA BALDOVINO, *La unión de hecho en el Perú y su desarrollo normativo...*, cit., p.711

⁸⁵ A. PLACIDO VILCACHAGUA, citado por A. MELLA BALDOVINO, *La unión de hecho en el Perú y su desarrollo normativo, Estudios críticos sobre el Código Civil*, Gaceta Jurídica, Lima, 2014, 1ª ed., pp. 711-712

matrimonio, esto quiere decir que hacen vida de casados sin estar casados y como sucede con los cónyuges, los concubinos adquieren bienes durante la vigencia de sus convivencia, por lo mismo es que a fin de no desprotegerlos, el derecho brinda a los mismos un régimen patrimonial análogo al del matrimonio civil.

Así por ejemplo al igual como sucede con la sociedad de gananciales, el régimen patrimonial de las uniones de hecho es indivisible, porque no se trata de una copropiedad, sino de una mancomunidad de bienes. Al igual que la sociedad de gananciales, la sociedad de bienes de los convivientes está compuesta por bienes propios y por bienes sociales, para determinarse los bienes propios se sigue la regla del artículo 302 del Código Civil⁸⁶; respecto de los bienes sociales, como bien decía Calderón Beltrán⁸⁷, compone esta comunidad de bienes, todas aquellas adquisiciones efectuadas por los concubinos a título oneroso, luego de haberse cumplido dos años de convivencia, tanto las adquiridas por los dos convivientes, como las adquiridas por uno sólo de los convivientes, así como el producto y los frutos de los bienes propios y el producto y los frutos de los bienes sociales, excluyéndose los bienes propios normados en el art. 302 del C.C.; agregando este autor como diferencia con la sociedad de gananciales matrimonial, que a diferencia del régimen patrimonial matrimonial de sociedad de gananciales que establece una presunción “iuris tantum” en el inciso 1 del artículo 311 del Código Civil, al citar que: “Todos los bienes se presumen sociales, salvo prueba en contrario”, el

⁸⁶ **Artículo 302.-** Son bienes propios de cada cónyuge:

- 1.- Los que aporte al iniciarse el régimen de sociedad de gananciales.
- 2.- Los que adquiera durante la vigencia de dicho régimen a título oneroso, cuando la causa de adquisición ha precedido a aquélla.
- 3.- Los que adquiera durante la vigencia del régimen a título gratuito.
- 4.- La indemnización por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o de enfermedades, deducidas las primas pagadas con bienes de la sociedad.
- 5.- Los derechos de autor e inventor.
- 6.- Los libros, instrumentos y útiles para el ejercicio de la profesión o trabajo, salvo que sean accesorios de una empresa que no tenga la calidad de bien propio.
- 7.- Las acciones y las participaciones de sociedades que se distribuyan gratuitamente entre los socios por revaluación del patrimonio social, cuando esas acciones o participaciones sean bien propio.
- 8.- La renta vitalicia a título gratuito y la convenida a título oneroso cuando la contraprestación constituye bien propio.
- 9.- Los vestidos y objetos de uso personal, así como los diplomas, condecoraciones, correspondencia y recuerdos de familia.

⁸⁷ J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales, Personales...*, cit., pp. 117

concubinato no admite dicha presunción, siendo necesario para efecto de otorgarse la categoría de bien social, que se acredite su adquisición onerosa luego de transcurridos dos años de convivencia y que se acredite la vigencia de la convivencia durante el periodo de adquisición. Cornejo Chávez⁸⁸, señalaba que la abrumadora mayoría de hogares, funda sus posibilidades de sustento material en la fuerza del trabajo, las cargas sociales se hacen efectivas sobre el producto de dicha actividad, y en ello hay causa bastante para que la ley reconozca la naturaleza de comunes a los bienes rendidos por el trabajo de cualquiera de los cónyuges. Contribuye a darles ese carácter la circunstancia, no por indefinible menos cierta, de que cada cónyuge presta al otro, normalmente, una cooperación activa o pasiva en la adquisición de bienes materiales. Señalando además en referencia a las rentas de los derechos de autor y de inventor, que esos derechos constituyen en sí mismo bienes propios, pero las rentas que producen son sociales, como ocurre con todos los bienes propios.

Ahora a diferencia de los cónyuges que automáticamente se encuentran bajo el régimen de sociedad de gananciales por el sólo hecho de la celebración del matrimonio, esta sociedad de gananciales se generará en las uniones de hecho propias luego de transcurridos dos años de convivencia, por lo que los bienes que los convivientes hayan adquirido antes de esos dos años, no tienen la calidad de bienes sociales, serán del adquiriente o de ambos en copropiedad si es que ambos han participado en la adquisición, es decir si ambos han comprado. Plácido Vilcachagua⁸⁹ decía que el artículo 326 del Código Civil, en concordancia con el artículo 5 de la Constitución Política de 1993, condiciona la aplicación de las normas del régimen de sociedad de gananciales a que esta unión haya durado por los menos dos años continuos. Esto significa que, mientras no se cumpla con este plazo, los convivientes someten sus relaciones patrimoniales a las reglas de la comunidad de bienes y, en su caso, a las de copropiedad, en vista de no existir regulación sobre la primera en el Código

⁸⁸ H. CORNEJO CHÁVEZ, *Derecho Familiar Peruano...*, cit., pp. 296-297

⁸⁹ A. PLÁCIDO VILCACHAGUA, "Familia, Matrimonio, Convivencia y Constitución", en C. CALDERÓN PUERTAS, M. ZAPATA JAÉN Y C. AGURTO GONZALES (coords.), *Persona, Derecho y Libertad. Escritos en homenaje al Profesor Carlos Fernández Sessarego*, Motivensa, Lima, 2009, p. 504

Civil. De otra parte, Mella Baldovino⁹⁰ nos ilustra diciendo que nuestro ordenamiento legal prohíbe la aplicación retroactiva de las normas, con excepción en materia penal. Aplicando el análisis realizado podría válidamente sostenerse que la redacción actual del artículo 326 del Código Civil no puede generar una aplicación con efectos retroactivos del inicio de la adquisición de los derechos patrimoniales de una “unión de hecho” de carácter propia, y consecuentemente, pretender liquidar los bienes adquiridos durante los dos (2) años primeros continuos de convivencia, por no corresponder este al periodo de la sociedad de bienes que sujeta al régimen de sociedad de gananciales, en cuanto le fuera aplicable. De lo expuesto podemos concluir que de la lectura del artículo 326 del Código Civil, no se desprende que los derechos sociales de índole convivencial se adquieran al día uno de iniciada la convivencia, una vez que cumplió los dos años, sino más bien lo contrario a razón de lo ya explicado. Una lectura simple y primaria del artículo 326 del Código Civil nos llevaría a la conclusión –a efectos de la determinación del inicio de la adquisición de los derechos patrimoniales en una “unión de hecho” de carácter propia- a que la adquisición de derechos se iniciaría el día uno después de haber cumplido los dos (2) años de convivencia, toda vez que antes de haberse cumplido tal plazo, los convivientes tenían el derecho de adquirir bienes de forma exclusiva sin que estos ingresen a un caudal social.

De otra parte, al igual como sucede con los bienes sociales matrimoniales, la regla del artículo 315 del Código Civil es aplicable al régimen patrimonial de las uniones de hecho, por lo que: “Para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad, si tiene poder especial del otro”. Sin embargo a diferencia de los esposos, para que un conviviente ostente legitimidad para obrar para pedir la nulidad o la ineficacia de esta compra venta, previamente deberá de acreditar la existencia de la unión de hecho, a través del reconocimiento notarial o judicial que ya hemos esbozado.

⁹⁰ A. MELLA BALDOVINO, *La unión de hecho en el Perú y su desarrollo normativo...*, cit., pp. 712-714

Asimismo será aplicable a la sociedad de bienes de las uniones de hecho, las mismas reglas de liquidación de la sociedad de gananciales matrimonial, es decir, luego de que fenezca la unión de hecho, los convivientes tendrán que hacerse un inventario, siguiendo las reglas del artículo 320 del Código Civil, donde se comprenda al activo y al pasivo de la sociedad, esto es a los bienes sociales y propios y a las obligaciones, cargas y deudas; luego se pagarán las obligaciones y las cargas sociales, y finalmente procederán a repartirse los gananciales, es decir, los remanentes o bienes que quedarán luego de pagarse las cargas y las obligaciones, estos gananciales siguiendo a lo legislado por el artículo 323 del Código Civil, se repartirán entre los concubinos por mitad entre ambos.

En conclusión como bien ha señalado Plácido Vilcachagua⁹¹, una vez cumplido el plazo señalado, a la comunidad de bienes existente entre los convivientes se le aplicarán las reglas de la sociedad de gananciales, en cuanto fuese pertinente; lo que no importa una conversión de la comunidad de bienes en sociedad de gananciales. Esto último es relevante cuando se compruebe la impertinencia de la aplicación de las normas de sociedad de gananciales; en estos casos, las disposiciones de la comunidad de bienes y, en su caso, las de copropiedad serán las pertinentes. Esto quiere decir que no se trata de una aplicación automática de tales disposiciones, sino sólo de aquellas que resulten pertinentes. Vale decir, que ante un problema patrimonial de los convivientes, la solución se debe encontrar, en primer lugar, en las normas del régimen de sociedad de gananciales que resulten pertinentes aplicar; y, en caso comprobar la impertinencia de tal aplicación extensiva, sólo en este caso la respuesta estará en las disposiciones del régimen de copropiedad. Del texto constitucional no se infiere una aplicación conjunta o concordada de las normas de sociedad de gananciales con las normas de copropiedad.

⁹¹ A. PLÁCIDO VILCACHAGUA, “*Familia, Matrimonio, Convivencia y Constitución*”...,cit., pp. 504-505

El mismo Alex Plácido Vilcachagua⁹², se preguntaba pero ¿Cómo saber cuando una norma de sociedad de gananciales es pertinente o no aplicar a la comunidad de bienes de los convivientes? La respuesta se encuentra en los límites de la aplicación extensiva que deberán ser apreciados caso por caso. No obstante, los límites pueden ser deducidos de los siguientes criterios: a) el respeto a la naturaleza jurídica del régimen patrimonial de los convivientes; y b) la inaplicación de las disposiciones del régimen de sociedad de gananciales que establezcan excepciones o restrinjan derechos. Así, por ejemplo, no resulta pertinente aplicar la previsión del artículo 296 del Código Civil según el cual los cónyuges pueden modificar su régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios. Ello es así, por cuanto el régimen patrimonial de los convivientes es único y forzoso; no pudiendo, por tanto, sustituir –durante la convivencia- la comunidad de bienes impuesta por mandato constitucional. Otro ejemplo es el referido a la impertinencia de la aplicación del artículo 324 del Código Civil que establece la pérdida de gananciales por el cónyuge culpable de la separación de hecho, por cuanto esta última situación importa la extinción de la unión de hecho. Vale decir, que en caso de separación de hecho se extingue la comunidad de bienes entre los convivientes y debe procederse a su liquidación; cesando de producirse derechos comunitarios.

⁹² Ibídem, p.505

Cuadro Resumen- Las características de la comunidad de bienes de las uniones de hecho

Mancomunidad de bienes	<ul style="list-style-type: none"> • Quiere decir que no se trata de una copropiedad, porque los bienes adquiridos no se encuentra subdivididos en cuotas alícuotas, los bienes sociales pertenecen a la comunidad de bienes y a no así por partes iguales a los convivientes.
Régimen patrimonial forzoso	<ul style="list-style-type: none"> • Quiere decir que el régimen patrimonial de la unión de hecho es único y forzoso; no pudiendo los convivientes sustituir la comunidad de bienes impuesta por la ley, durante la vigencia de la vida en común.
Se rige por las normas de la sociedad de gananciales matrimonial	<ul style="list-style-type: none"> • Una vez cumplido el plazo señalado por la ley (2 años), a la comunidad de bienes existente entre los convivientes se le aplicarán las reglas de la sociedad de gananciales, en cuanto fuese pertinente; lo que no necesariamente significa una conversión de la comunidad de bienes en sociedad de gananciales. • Al igual que la sociedad de gananciales, la sociedad de bienes de los convivientes está compuesta por bienes propios y por bienes sociales. • Antes de los dos años, se aplicarán a los bienes adquiridos conjuntamente por los convivientes, las normas de la copropiedad.

2.2. AUTONOMÍA DE LOS CONCUBINOS PARA VARIAR O SUSTITUIR A SU RÉGIMEN PATRIMONIAL:

El régimen forzoso del concubinato, ha determinado que tanto el Poder Judicial, como el Tribunal Registral, desamparen o rechacen las solicitudes de los concubinos pretendiendo la variación de su régimen patrimonial o el establecimiento del llamado régimen patrimonial de separación de patrimonios.

Así por ejemplo en la Resolución del Tribunal Registral Nro. 003-2002-ORLC/TR, el Tribunal Registral estableció que: “El CC reconoce dos regímenes patrimoniales en relación al matrimonio: sociedad de gananciales y separación de patrimonios; asimismo, se faculta a los contrayentes (antes de la celebración del matrimonio) y a los cónyuges (después de celebrado) a optar por cualquiera de los regímenes, elección que para ser oponible a terceros deberá ser inscrita en el correspondiente Registro Personal del Registro de Personas Naturales (artículos 295 y 296 del CC); en cambio, tratándose de la unión de hecho –que reúna los requisitos legales- el régimen aplicable, como queda dicho, por imperio de la ley será el de sociedad de gananciales; a mayor abundamiento, debe decirse que, la posibilidad de sustituir un régimen por otro se presenta en los siguiente casos: por voluntad de los interesados antes de contraer matrimonio como se ha indicado en el considerando que antecede; la constitución voluntaria del régimen matrimonial durante el matrimonio prevista en el artículo 296, por decisión judicial cuando uno de los cónyuges abusa de las facultades que le corresponden o actúa con dolo o culpa; y por la declaración de quiebra de uno de los cónyuges establecida en el artículo 330; de lo que se colige que el régimen de separación de patrimonios constituye la excepción y está prevista solo para las sociedades conyugales”.

En la Sentencia Casatoria N° 1306-2002- PUNO ⁹³ de fecha 10 de septiembre del año 2002, se cita que el Código Civil al establecer que las uniones de hecho le son aplicables las normas del régimen de sociedad de gananciales, lo hace como mandato imperativo, ello sin regular que tal régimen pueda ser modificado por el de separación de patrimonios; además, a dicha unión solo serán aplicables la normas de la sociedad de gananciales en aquellos supuestos que fueran jurídicamente posibles, es decir, no todas las disposiciones de dicho régimen son aplicables a la unión de hecho. En el presente caso la recurrente cuestiona la declaración de improcedencia de la demanda por la cual solicitó la separación de patrimonios en la unión de hecho que mantenía desde varios años con el demandado. Sobre el pedido los órganos jurisdiccionales señalaron que no resultaba procedente a la luz de la interpretación del artículo 326°, en buena cuenta, nuestra legislación para el caso de las uniones de hecho no ha adoptado la teoría de la equiparación de dicha institución al matrimonio y, por tanto, a una unión de hecho no son aplicables todas las normas que regulan al matrimonio, sino únicamente aquellas que autorizadas por la ley resulten aplicables. Conforme a lo establecido en el artículo 296° del Código Civil, nuestra legislación solo reconoce la posibilidad de variación de un régimen patrimonial por otro al matrimonio; por tanto, las uniones de hecho que cumplan con los requisitos establecidos por la ley obligatoriamente se regirán por las normas pertinentes del régimen de sociedad de gananciales; quedando impedido a los convivientes o alguno de ellos de solicitar la sustitución de dicho régimen por el de separación de patrimonios.

Tal y como se aprecia de estas resoluciones y como hemos visto al estudiar las características de esta sociedad o comunidad de bienes de las uniones de hecho, que no es otra cosa que una sociedad de gananciales, los concubinos no tienen ninguna opción de elegir algún otro régimen patrimonial, como por ejemplo el régimen patrimonial de separación de patrimonios, un aspecto que el derecho debería repensar a fin de perfeccionar la protección patrimonial a esta clase de familias, postulo en este trabajo de investigación a aquella tesis doctrinaria que permitiría a los convivientes el autorregular bajo la autonomía de la voluntad, a su régimen patrimonial durante la convivencia, como sucede con las parejas matrimoniales, el derecho no debería

⁹³ Extraída de Diálogo con la Jurisprudencia. Numero 54, Año 9, marzo 2003, Pág. 188.

restringir esta libertad a los convivientes, en tanto que esta restricción afecta su derecho de propiedad. La legislación del Libro de Familia del Código Civil de 1984 se encuentra desactualizada para el contexto de las relaciones familiares, tanto en lo convivencial como en lo matrimonial y ello debido principalmente a la falta de visión de las relaciones interpersonales en la actualidad⁹⁴.

En el sentido expuesto, no podíamos dejar de mencionar las ideas de Vega Mere⁹⁵, para este autor, existen dos vías que fundamentan las razones por las que, se puede permitir a los convivientes regular sus relaciones patrimoniales antes o después del surgimiento de la sociedad de gananciales. La primera vía de explicación parte de la consagración del principio de protección de la familia en el texto del actual art. 4 de la Constitución y entiende que el art. 5 fue una repetición no meditada del numeral 9 de la Constitución de 1979 sin mayor debate y sin advertirse (sólo por contadísimos constituyentes) que el mosaico que resultaría de la redacción de ambos textos implicaba un cierto contrasentido dado que las razones que justificaron el art. 9 de la derogada Ley Fundamental habían sido superadas y, a la luz del principio de protección (“integral”) de la familia, la protección de la unión de hecho no podía quedar reducida a aspectos patrimoniales ni podía ya entenderse –aun con su redacción limitativa- como la imposición de un régimen económico que se sustentó en el temor a las burlas y mentiras del concubino varón que usaron como justificación los constituyentes de 1978-1979. Los principios éticos de la sociedad que vio nacer la Constitución de 1979 han mutado, razón por la cual resultaba y resulta imposible leer del mismo modo el numeral 9 de aquella Carta que el art. 5 de la actual Constitución. De esta forma llegamos al concepto de mutación Constitucional. La mutación constitucional no altera el texto de una norma constitucional pero modifica su contenido desde el momento en que el significado que se la atribuye es otro. La segunda vía por la que es posible permitir la celebración por los concubinos de pactos que regulen sus relaciones patrimoniales tiene relación con la compresencia de principios opuestos (o aparentemente opuestos) al interior de la misma Constitución.

⁹⁴ M. BERMUDEZ TAPIA, “Análisis del régimen patrimonial en las uniones de hecho”, Gaceta Civil, Tomo 38, Lima, 2016, p. 67

⁹⁵ Y. VEGA MERE, *Las Nuevas Fronteras del Derecho de Familia...*, cit., pp. 136-138

Asimismo sostenía Yuri Vega Mere⁹⁶ que no queda otro camino que contraponer el principio de protección integral e incondicionada de la familia (de todo tipo de familia) que penetra y atraviesa el derecho de familia y lo colorea insuflándole contenidos y sentidos (art. 4 de la Constitución), con el principio de protección únicamente patrimonial (art. 5), a lo cual he de sumar, en defensa de mi tesis, el principio de autonomía de las personas como derecho fundamental (inciso 14 del art. 2 de la misma Constitución). Estos casos nos conducen a una suerte de búsqueda de criterios para “jerarquizar” los principios en colisión. Balaguer sostiene que no puede hablarse de jerarquía entre principios más que un sentido impropio y que ello no determina invalidez de los presuntamente inferiores, por lo que sugiere hablar de preferencia aplicativa. Es claro que considero que el principio de protección de la familia aunado al principio de autonomía tienen conjuntamente aplicación preferente frente a la protección patrimonial del concubinato traducida en la imposición de un único régimen económico que, de esa forma, sin que quede derogado o inaplicado, cede ante la fortaleza y justicia de los otros dos principios facilitando la posibilidad de que los convivientes regulen sus relaciones patrimoniales pudiendo acceder al Régimen de Separación de Patrimonios.

De otra parte, la aplicación de un sólo y forzoso régimen patrimonial (sociedad de gananciales) que tuvo origen en evitar abusos de parte de uno de los concubinos hacia el otro, no siempre ha resultado siendo la solución de protección patrimonial más eficaz, puesto que la falta de publicidad de la calidad social de los bienes o la falta de inscripción de las uniones de hecho, ha dado lugar a diversas ventas unilaterales de los bienes sociales como bienes propios, aprovechando el conviviente vendedor de esta falta de publicidad, de que el bien se encontraba inscrito solamente a su nombre o de que en su documento de identidad se le identifica con el estado civil de soltero, actos éstos que originan graves perjuicios económicos al conviviente que no participa de la venta, pues existen principios registrales como el principio de buena fe registral que protegen al comprador manteniéndolo en la adquisición efectuada, principio señalado en el artículo 2014 del Código Civil⁹⁷, que a resumidas cuentas, tienen consecuencias

⁹⁶ Y. VEGA MERE, *Las Nuevas Fronteras del Derecho de Familia...*, cit., pp.138-139

⁹⁷ **Artículo 2014. Principio de buena fe pública registral**

graves para el afectado, como la pérdida definitiva de los bienes sociales enajenados, en ese sentido, debe permitirse a los concubinos elegir su régimen propio régimen patrimonial, pues muchas veces el régimen de separación de patrimonios podría poner fin a estas numerosas ventas unilaterales.

Aguilar Llanos⁹⁸, citaba que un tema que ha adquirido importancia inusitada es el concerniente al régimen económico del matrimonio, y ahora tenemos que decir, igualmente, régimen económico de la unión de hecho. Como hecho anecdótico resaltar que desde hace aproximadamente una década, uno de los regímenes económicos del matrimonio, como es la separación de patrimonios hoy ha tomado una interesante iniciativa por parte de los futuros celebrantes de un matrimonio, que antes lo tenían como una opción excepcionalísima, y hoy es una opción prioritaria, sobretudo en los matrimonios jóvenes, en donde hombre y mujer generan sus propios recursos; en esa circunstancia, ahora tanto el régimen de sociedad de gananciales como el de separación de patrimonios, se utilizan casi compartiendo igual porcentaje en cuanto al número de estos. Sobre la separación de patrimonios, y para su viabilidad se está sugiriendo dejar del lado el formalismo riguroso que hoy existe y cambiarlo por uno más expeditivo, como es el de quedar constituida la separación de patrimonios, con la elección que haga la pareja en el acto de la celebración del matrimonio, cuando el celebrante pregunte a los contrayentes por el régimen económico a elegir, y si optan por la separación de patrimonios, entonces quedaría a cargo de la municipalidad el remitir el oficio correspondiente al registro personal para su inscripción, con ello se obviaría minuta e inscripción en el registro por parte de los contrayentes. Si fuera el caso de las uniones de hecho regulares e inscritas, invertir la prioridad de los regímenes, y así, el régimen de separación de patrimonios sería el que se aplique a las parejas, salvo que elijan el régimen de sociedad de gananciales. Sobre el particular, si la observación que se hace para no conceder a las uniones de hecho, la opción de elegir no sólo el régimen de

El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustentan.

La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.

⁹⁸ B. AGUILAR LLANOS, “A treinta años del Código Civil: retos del Derecho de Familia”, en M. TORRES CARRASCO (coord.), *Estudios Críticos sobre el Código Civil*, Gaceta Jurídica, Lima, 2014, pp. 533-535

sociedad de gananciales que por ley lo tienen, sino igualmente el de separación de patrimonios, termina siendo la incertidumbre e inseguridad ante los terceros, en tanto no constaba el registro de las uniones de hecho, pero ello ha sido superado con la Ley Nro. 29560 que posibilita el registro de estas uniones de hecho, en consecuencia, habría desaparecido el obstáculo para negarles esa opción.

A ello debemos de agregar que como bien han citado autores como Max Arias-Schreiber⁹⁹, la unión de hecho permite a los concubinos celebrar toda clase de contratos entre sí, en la medida de que tengan capacidad de obrar. En efecto, si la ley lo autoriza tratándose de los cónyuges, obviamente no existe impedimento para los concubinos. Funciona para ellos, por lo demás, la prohibición establecida por el artículo 312°, en virtud del cual los cónyuges no pueden celebrar contratos entre sí respecto de los bienes de la sociedad, habida cuenta de la remisión que se hace en el primer párrafo del artículo 326° del mismo código, en cuanto concierne a la sociedad de bienes que se genera en el concubinato y a la correspondiente sujeción a las normas existentes en el régimen de la sociedad de gananciales.

Estando a lo expuesto por estos juristas, es que no existen mayores razones para seguir negando en la actualidad a los convivientes, la autorregulación de su régimen patrimonial, la ley debe modificarse, pues en estos tiempos resulta un contrasentido, someter a las uniones de hecho a un sólo régimen patrimonial en contravención de su libre autonomía, de su libertad de contratar y de elegir, que son derechos fundamentales que son negados a los convivientes por la redacción descuidada del artículo 5 de la actual Constitución Política y por la redacción del artículo 326 del Código Civil, que originalmente siguió los parámetros de la Constitución Política de 1979, debe permitirse esta clase de actos jurídicos a los convivientes, permitiéndoles la elección de su régimen patrimonial, puesto que dichos actos no contienen fines ilícitos, más aún cuando en la sociedad actual, tanto varón como mujer trabajan y se vienen realizando por separado y desarrollando económicamente individualmente, lo que redundaría en la

⁹⁹ M. ARIAS-SCHREIBER PEZET, “El Derecho de Familia y los Contratos”, en F. DE TRAZEGNIES GRANDA, R. RODRÍGUEZ ITURRI, C. CÁRDENAS QUIROS y J. ALBERTO GARIBALDI (coords), *La Familia en el Derecho Peruano, Libro Homenaje al Dr. Héctor Cornejo Chávez*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1990, p. 271.

utilidad de permitirles optar por la separación de patrimonios, a fin de evitarles algún perjuicio económico o aprovechamiento de su pareja convivencial. A ello debemos agregar que independientemente de la posición asumida por el constituyente del año 1978-1979 y por el legislador del Código Civil de 1984, que vieron al concubinato con mucho recelo, por lo que procuraron su desaparición progresiva reduciendo sus derechos a un aspecto meramente patrimonial y además restringido, pues como se aprecia ni siquiera en el aspecto patrimonial se equiparó a las uniones de hecho con las uniones maritales, la Constitución actual nos obliga a interpretar a las uniones de hecho más allá del aspecto meramente literal del artículo 5, sino que esta institución familiar debe interpretarse conjugándose este artículo con el principio de protección de la familia, es decir con el artículo 4 de la Constitución Política vigente (en todos sus aspectos, tanto personales como patrimoniales).

Como antes he citado, la redacción del art. 9 de la Constitución de 1979 y del actual art. 326 del Código Civil, tuvieron como finalidad evitar que el concubino abuse de la concubina adquiriendo bienes de ambos que luego eran puestos a nombre del varón o que éste se llevaba cuando abandonaba a la concubina. Bajo tales argumentos se pensó que la imposición del régimen obligatorio de la sociedad de bienes o sociedad de gananciales, se lograría aquella protección. Sin embargo, la realidad terminó por hacer infructuosas estas premisas del constituyente de fines de los años setenta y del legislador de los años ochenta, pues la falta de publicidad adecuada y la presunta prohibición para celebrar pactos entre los convivientes para regular sus relaciones patrimoniales han contribuido, perversamente, a que se produzca justamente el resultado que quisieron evitar los constituyentes conservadores de 1978-1979 y el ponente del Libro de Familia. Su esquema constitucional-legal fracasó.

Por lo expuesto, soy partidario de las ideas de Yuri Vega Mere, que antes he recogido en este trabajo, pues a partir del principio de protección constitucional de la familia y de la libertad de autonomía, una forma de brindar protección a los concubinos se dará abriéndoles el camino para que ellos puedan organizar sus relaciones patrimoniales (sin esperar que todos sus problemas los resuelva el Estado), haciendo uso de la figura de propiedad exclusiva a través de la separación de patrimonios, a ello debe aunarse la

existencia de una más integral publicidad de las uniones de hecho, a efecto de protegerse a los propios concubinos y a los terceros que contraten con ellos, que pueden incluir nuevas aristas, como por ejemplo brindarles a los convivientes en documentos y datos públicos como los que obran en los datos de RENIEC, la inscripción de un nuevo estado civil, el de conviviente o concubino; téngase presente que la cohabitación no genera estado civil oponible (e inscrito), por lo que es claro que cualquiera de los miembros de la pareja podría vender su cuota, con lo cual se hace inútil predicar que, cumplidos los requisitos del concubinato, se protegerá a los concubinos aplicando el régimen de la sociedad de gananciales y el artículo 315 del Código Civil.

CAPITULO III

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS

1. PRESENTACION

La población y muestra considerados para la presente investigación como unidades de estudio fueron magistrados, notarios , registradores y abogados de la especialidad del Derecho de Familia de la ciudad de Arequipa que opinaron sobre la idoneidad de los criterios jurídicos que sustentan la inscripción registral de las uniones de hecho propias y que permiten cautelar los derechos patrimoniales de los convivientes, durante los meses de enero a setiembre del año 2016, que sumaron un total de 310 personas con conocimiento acerca del tema materia de investigación.

Después de haber recopilado las opiniones respectivas de las personas encuestadas, se estuvo en la condición de delimitar las limitaciones de la protección de las situaciones jurídicas patrimoniales de los convivientes en sede judicial, notarial y registral.

Es así que los datos recogidos de la encuesta realizada fueron sometidos a la tabulación correspondiente, todo lo cual me ha permitido elaborar los cuadros y gráficos que presento a continuación para luego poder efectuar la discusión de resultados correspondiente que me permitió elaborar las conclusiones y sugerencias pertinentes.

2. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

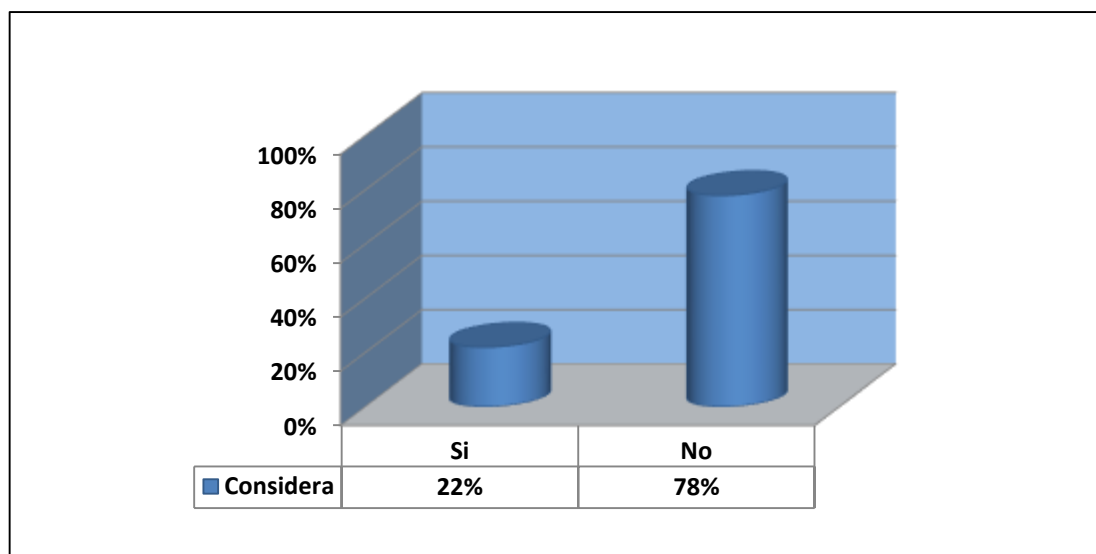
CUADRO N° 1

Considera Usted que el Estado brinda cautela jurídica a los derechos patrimoniales de los convivientes

Encuestados	Considera		Total
	Si	No	
Magistrados del Poder Judicial	14	26	40
Magistrados del Ministerio Público	12	28	40
Notarios	3	7	10
Registradores	6	14	20
Abogados litigantes	33	167	200
Subtotal	68	242	310
%	22	78	100

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a los magistrados, abogados, notarios y registradores de la ciudad de Arequipa 2016.

GRAFICO N° 1



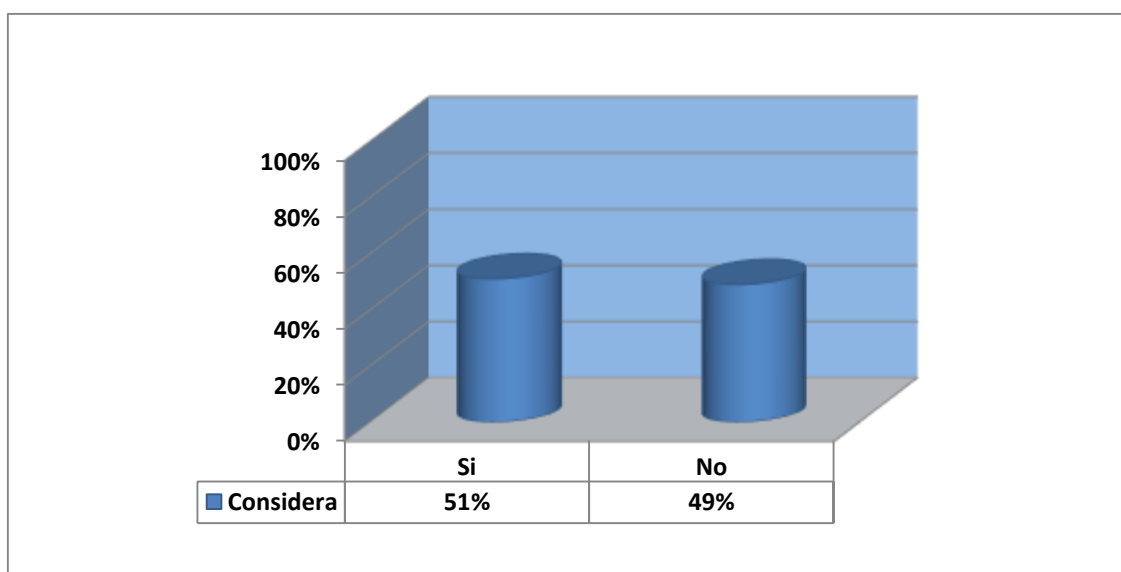
CUADRO N° 2

Considera Usted que la normativa actual brinda protección jurídica a las situaciones jurídicas patrimoniales de los convivientes en sede judicial, notarial y registral

Encuestados	Considera		Total
	Si	No	
Magistrados del Poder Judicial	22	18	40
Magistrados del Ministerio Público	24	16	40
Notarios	5	5	10
Registradores	12	8	20
Abogados litigantes	95	105	200
Subtotal	158	152	310
%	51	49	100

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a los magistrados, abogados, notarios y registradores de la ciudad de Arequipa 2016.

GRAFICO N° 2



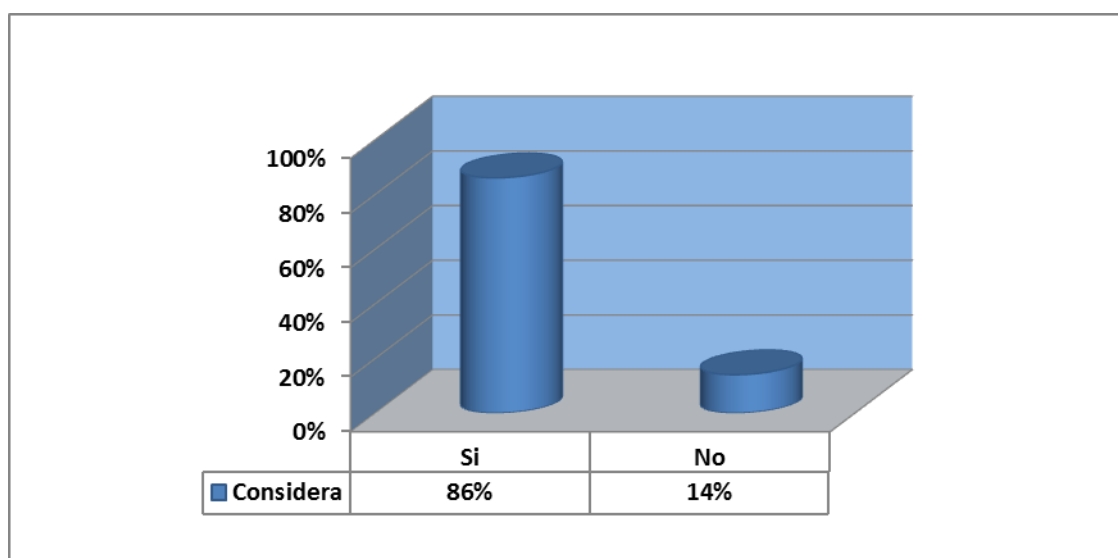
CUADRO N° 3

Considera Usted que el reconocimiento y protección jurídica de las situaciones jurídicas patrimoniales de los convivientes se ve afectada en sede judicial, notarial y registral

Encuestados	Considera		Total
	Si	No	
Magistrados del Poder Judicial	31	9	40
Magistrados del Ministerio Público	32	8	40
Notarios	8	2	10
Registradores	17	3	20
Abogados litigantes	178	22	200
Subtotal	266	44	310
%	86	14	100

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a los magistrados, abogados, notarios y registradores de la ciudad de Arequipa 2016.

GRAFICO N° 3



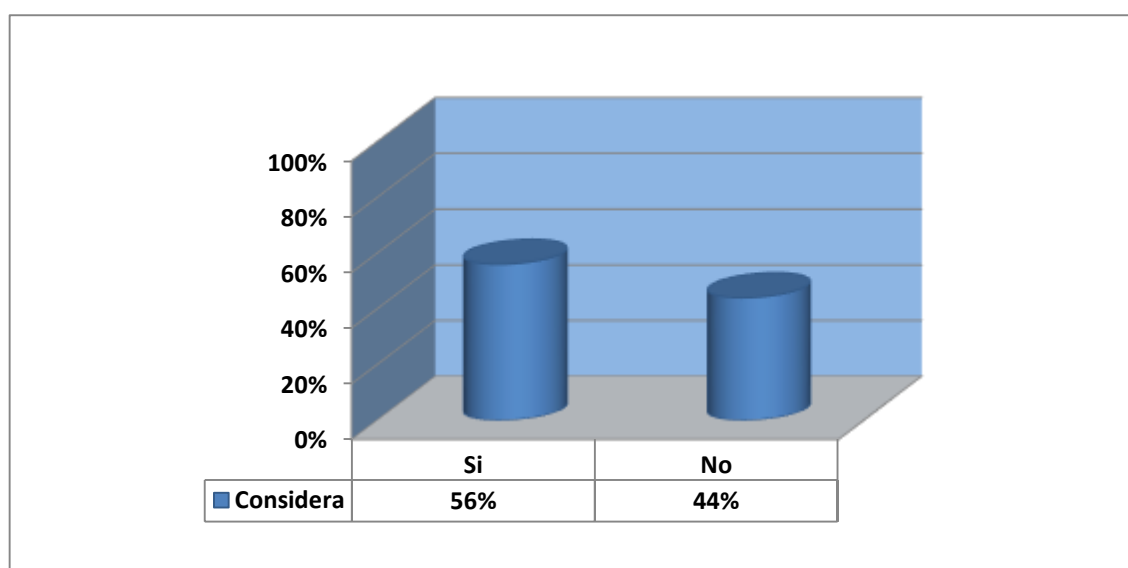
CUADRO N° 4

Considera Usted que los criterios que sustentan la Inscripción Registral de las uniones de hecho propias en el Perú son adecuados

Encuestados	Considera		Total
	Si	No	
Magistrados del Poder Judicial	25	15	40
Magistrados del Ministerio Público	27	13	40
Notarios	6	4	10
Registradores	14	6	20
Abogados litigantes	102	98	200
Subtotal	174	136	310
%	56	44	100

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a los magistrados, abogados, notarios y registradores de la ciudad de Arequipa 2016.

GRAFICO N° 4



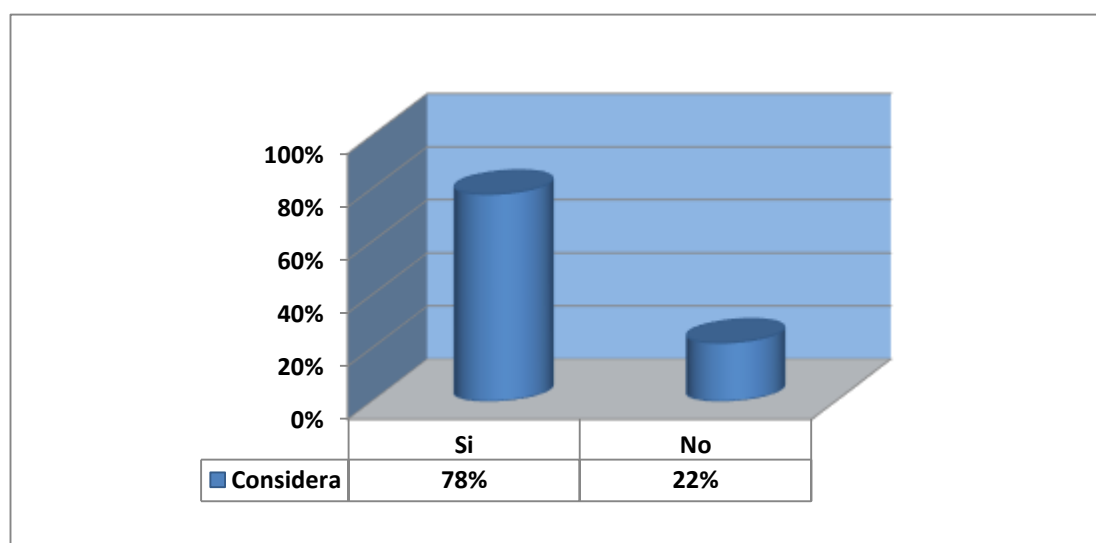
CUADRO N° 5

Considera Usted que la Ley debería permitir a los convivientes regular su propio régimen patrimonial, dándoles la posibilidad de optar por un régimen patrimonial distinto a la sociedad de bienes, como es el caso del régimen de separación de patrimonios.

Encuestados	Considera		Total
	Si	No	
Magistrados del Poder Judicial	31	9	40
Magistrados del Ministerio Público	28	12	40
Notarios	4	6	10
Registradores	14	6	20
Abogados litigantes	164	36	200
Subtotal	241	69	310
%	78	22	100

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a los magistrados, abogados, notarios y registradores de la ciudad de Arequipa 2016.

GRAFICO N° 5



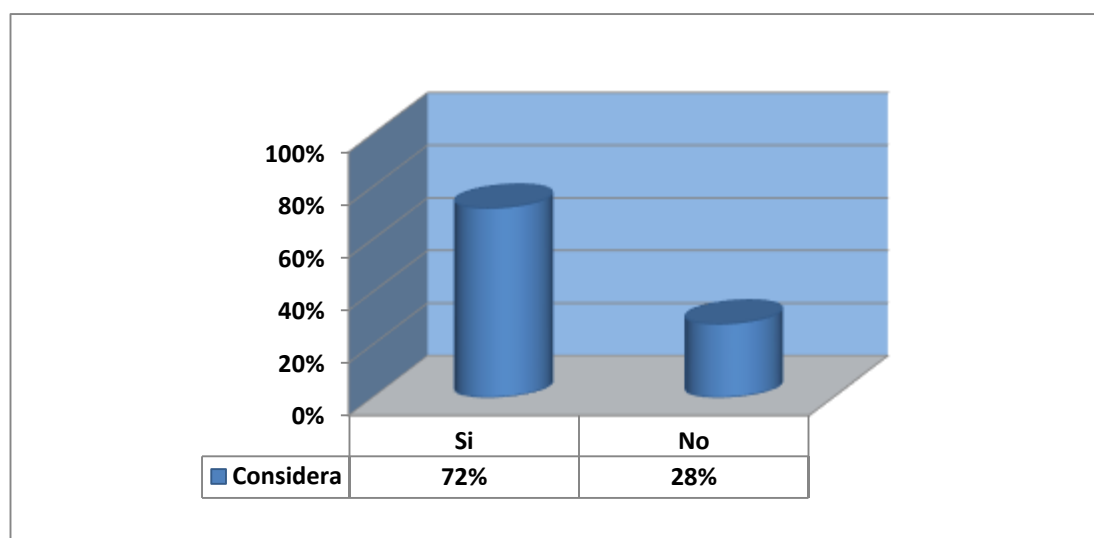
CUADRO N° 6

Considera usted adecuado aquella postura que propugna proteger a los convivientes de los actos de disposición unilateral de bienes sociales, estableciendo como su régimen patrimonial principal a la separación de patrimonios y como su régimen patrimonial supletorio a la comunidad o sociedad de bienes.

Encuestados	Considera		Total
	Si	No	
Magistrados del Poder Judicial	29	11	40
Magistrados del Ministerio Público	23	17	40
Notarios	4	6	10
Registradores	8	12	20
Abogados litigantes	159	41	200
Subtotal	223	87	310
%	72	28	100

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a los magistrados, abogados, notarios y registradores de la ciudad de Arequipa 2016.

GRAFICO N° 6



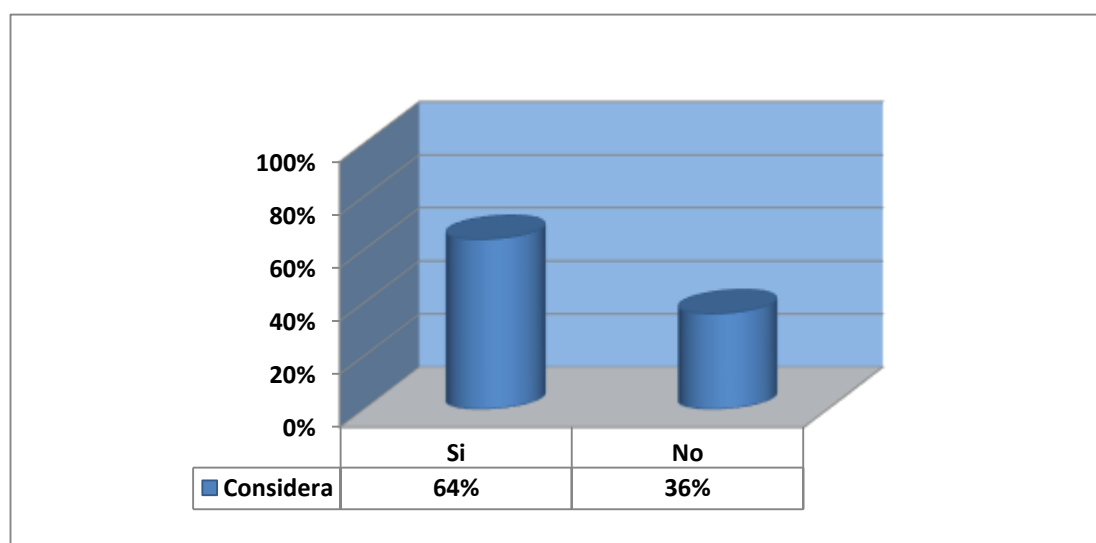
CUADRO N° 7

Considera Usted que a fin de brindar mayor publicidad a las uniones de hecho, debería crearse un nuevo estado civil, inscribiéndose en los datos de la Reniec y en los documentos nacionales de identidad de los convivientes el estado civil de “conviviente o concubino”

Encuestados	Considera		Total
	Si	No	
Magistrados del Poder Judicial	31	9	40
Magistrados del Ministerio Público	21	19	40
Notarios	4	6	10
Registradores	7	13	20
Abogados litigantes	134	66	200
Subtotal	197	113	310
%	64	36	100

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a los magistrados, abogados, notarios y registradores de la ciudad de Arequipa 2016.

GRAFICO N° 7



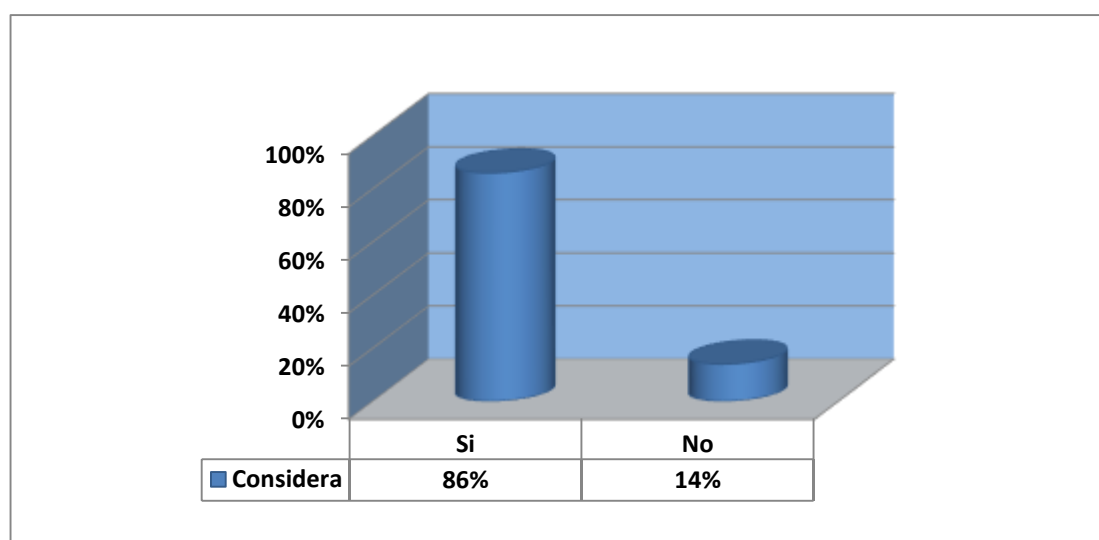
CUADRO N° 8

Considera Usted que un sólo proceso judicial él o la conviviente demandante podrían acumular a su pretensión de reconocimiento de unión de hecho, la pretensión de fenecimiento y liquidación de la sociedad de bienes convivencial.

Encuestados	Considera		Total
	Si	No	
Magistrados del Poder Judicial	32	8	40
Magistrados del Ministerio Público	27	13	40
Notarios	8	2	10
Registradores	14	6	20
Abogados litigantes	187	13	200
Subtotal	268	42	310
%	86	14	100

FUENTE: Información obtenida por el investigador de la encuesta aplicada a los magistrados, abogados, notarios y registradores de la ciudad de Arequipa 2016.

GRAFICO N° 8



3. DISCUSION DE LOS RESULTADOS

En base a los resultados de las encuestas, un 78% considera que el Estado no brinda protección a los derechos patrimoniales de los convivientes mientras que un 51% de los encuestados considera que la normativa actual en sede judicial, notarial y registral es adecuada. Ante lo cual podemos llegar a la conclusión que la imagen del Estado juega un importante rol subjetivo para el encuestado, ya que el mismo deslinda la efectividad y/o adecuación de la norma con el cumplimiento de la misma.

El 86% de los encuestados considera que los derechos patrimoniales se ven afectados en sede judicial, lo cual nos permite vislumbrar el grado de desconfianza y descontento en especial por parte de los abogados litigantes, respecto de la efectividad de los procesos judiciales.

Existe una leve mayoría representada por el 56% de los encuestados, la cual considera que los requisitos, características y condiciones establecidos a nivel normativo, doctrinario y jurisprudencial son acertados para merituar la inscripción de una Unión de Hecho Propia, lo cual a sus vez refleja la necesidad de un perfeccionamiento normativo.

Una mayoría importante (78%) considera que es viable darle al concubino la posibilidad de elegir entre los diferentes regímenes patrimoniales, tal como sucede en el ámbito matrimonial. Lo cual evidencia la consideración que tiene la unión de hecho como fuente de familia y a la vez respalda nuestra propuesta de reforma legislativa referida a la elección de un régimen patrimonial distinto de la Sociedad de Gananciales, sustentada en los Principios de Protección a la Familia y Autonomía.

El 72% de los encuestados considera que una protección más eficaz frente a la disposición unilateral de bienes, es el establecimiento como régimen patrimonial principal al de Separación de Bienes; lo cual refleja el poco éxito que ha tenido el régimen de Sociedad de Gananciales impuesto para proteger los derechos patrimoniales de los convivientes.

Un importante número de encuestados (64%) considera que la Publicidad de la convivencia juega un rol transcendental para la seguridad jurídica de los convivientes y frente a terceros, por lo que al igual que la sugerencia planteada en la presente Tesis, consideran necesaria la creación de un nuevo estado civil (conviviente).

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El cambio de contexto socio-cultural reflejado a su vez en el ámbito doctrinario y jurisprudencial respecto al reconocimiento de una nueva fuente de familia distinta al matrimonio, ha sido plasmado en la norma constitucional actual. En efecto al hacer una interpretación conjunta de los artículos 4 y 5 de la Constitución actual, evidenciamos el reconocimiento de la Unión de Hecho Propia como fuente de familia y como tal acreedora de protección constitucional conforme a su estatus, situación diferente a la que se presentaba en la Carta Magna de 1979 donde solo se reconocían derechos patrimoniales a la Unión de Hecho Propia, ello en atención a que se reconocía al matrimonio como única fuente de familia.

SEGUNDA.- La Unión de Hecho Propia es una institución diferente al matrimonio pero que se rige por algunas leyes propias de esta última. Los mecanismos jurídicos formales de inicio y terminación de ambas instituciones son distintos, pese a ello es evidente que normas creadas para el matrimonio se adecúan a la unión de hecho propia, debido a que la finalidad de la normativa de orden matrimonial busca proteger a la familia. La igualdad legislativa ha sido principalmente establecida en los derechos sucesorios.

TERCERA: Los derechos patrimoniales de los miembros de la Unión de Hecho Propia son protegidos mediante la imposición del Régimen de Sociedad de Gananciales, situación que refleja una protección incompleta de los mismos por parte del Estado. La limitación impuesta por el legislador evita que los miembros de una Unión de Hecho Propia administren sus patrimonios de acuerdo a su estilo de vida y designios. Dicha limitación es incongruente con la evolución legislativa reflejada a nivel normativo, doctrinario y jurisprudencial.

CUARTA: Brindar a la Unión de Hecho Propia la posibilidad de optar por el régimen de separación de patrimonios es viable y congruente con la normativa constitucional vigente. El principio de protección a la familia sumado al derecho de autonomía hacen posible la elección de un régimen patrimonial distinto al de Sociedad de Gananciales. Dicha posibilidad brindaría a los concubinos nuevas herramientas para la administración de su patrimonio, lo cual acrecentaría la protección patrimonial que brinda el Estado a sus derechos.

QUINTA: La publicidad juega un rol fundamental en la protección de los derechos patrimoniales de los convivientes, entre los mismos y frente a terceros. La posibilidad actual de inscribir el estado de convivencia en el Registro Personal de SUNARP, luego de un reconocimiento notarial o judicial, acrecienta la seguridad jurídica, estableciendo la calidad de los bienes (propios o sociales) sobre los cuales se contrata. Dicha publicidad puede ser complementada con el establecimiento de un nuevo estado civil, el de conviviente, el cual figure en el DNI.

SEXTA: La falta de consenso doctrinario y jurisprudencial acerca de la posibilidad de acumular las pretensiones de reconocimiento y partición de bienes gananciales en un solo proceso, genera una duplicidad innecesaria de juicios, lo cual es incompatible con los principios procesales de economía y celeridad. La conexidad de pretensiones hace viable la acumulación de estas pretensiones en una misma demanda.

SUGERENCIAS

PRIMERA.- Se debe instar al Poder Legislativo, la realización de una reforma legislativa, que desde el punto de vista patrimonial proteja de forma más integral a las uniones de hecho, para ello debería modificarse el artículo 326 del Código Civil, permitiendo a las uniones de hecho propias la libre elección entre los regímenes patrimoniales de sociedad de bienes o de separación de patrimonios, debería en el mismo artículo establecerse que la convivencia de hecho propia genera un nuevo estado civil inscribible en los registros de estado civil de la RENIEC, el estado civil de conviviente; asimismo y en vista que dicho artículo contiene aspectos procesales, debería establecerse que en un sólo proceso es posible acumular las pretensiones de reconocimiento de la unión de hecho y las pretensiones referidas a sus efectos patrimoniales y establecerse que las sentencias emitidas en esta clase de procesos son sentencias declarativas.

SEGUNDA: Asimismo debe instarse al Poder Legislativo la realización de una reforma de la Ley 29560, Ley que amplía la competencia Notarial en Asuntos No contenciosos, permitiendo el reconocimiento de las uniones de hecho en sede notarial, a fin de que en la solicitud notarial, los convivientes puedan optar por solicitar la aplicación del régimen patrimonial de separación de patrimonios o de sociedad de bienes, según sus propios designios; de la misma forma la Ley debería permitir a los concubinos el variar un régimen patrimonial por otro durante la vigencia de su convivencia, a través de una escritura pública inscribible en los Registros Públicos, tal y como sucede en la actualidad con los cónyuges.

TERCERA: Se debe instar a los operadores de justicia, a no limitarse a administrar justicia en los procesos de uniones de hecho, desde la redacción fría y descuidada del artículo 5 de nuestra Constitución Política vigente, el cual norma al concubinato desde una óptica similar a la Constitución Política de 1979, cuyo objetivo al igual que la redacción original del Código Civil de 1984 fue la paulatina extirpación de las uniones de hecho, debiendo por lo tanto los operadores de justicia, resolver éstos casos en conformidad con otras normas y principios constitucionales, como el principio de protección constitucional de la familia recogido en el artículo 4 de la Constitución .

BIBLIOGRAFIA

1. A. GIL DOMINGUEZ, M. FAMA y M. HERRERA, *Derecho Constitucional de Familia*, Tomo I., Ediar, Buenos Aires, 2006
2. A. MELLA BALDOVINO, La unión de hecho en el Perú y su desarrollo normativo, Estudios críticos sobre el Código Civil, Gaceta Jurídica, Lima, 2014, 1ª ed.
3. A. PLÀCIDO VILCACHAGUA, “*Familia, Matrimonio, Convivencia y Constitución*”, en C. CALDERÓN PUERTAS, M. ZAPATA JAÉN Y C. AGURTO GONZALES (coords.), *Persona, Derecho y Libertad. Escritos en homenaje al Profesor Carlos Fernández Sessarego*, Motivensa, Lima, 2009
4. A. PLÀCIDO VILCACHAGUA, *El Modelo Constitucional de Familia, la Orientación Sexual de los Padres y los Derechos del Hijo*. En: <http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/sumario/edon2/articulos/>
5. A. RUIZ ELDREDGE. *La Constitución Comentada*. Lima, Perú, 1979
6. B. AGUILAR LLANOS, “*A treinta años del Código Civil: retos del Derecho de Familia*”, en M. TORRES CARRASCO (coord.), *Estudios Críticos sobre el Código Civil*, Gaceta Jurídica, Lima, 2014
7. B. AGUILAR LLANOS, *Manual de Derecho de Sucesiones*, Pacífico, Lima, 2014, 1ªed.
8. B. AGUILAR LLANOS, “*Régimen patrimonial de las uniones de hecho*”, Gaceta Civil, Tomo 38, Lima, 2016
9. B. AGUILAR LLANOS, *Unión de hecho y Derecho de Herencia*, Pacífico, Lima, 2014, 1ª ed
10. C. FONSECA TAPIA, *Derecho Romano*, Adrus, Arequipa, 2007, 2ª ed.
11. C. MOSQUERA VASQUEZ, *En unión de hecho la sentencia no es constitutiva*, Diálogo con la Jurisprudencia, Tomo 176, Mayo, 2013
12. E. AMADO RAMIREZ, “*Un vistazo a la unión de hecho en el Perú. Regulación normativa y su relación con los derechos patrimoniales*”, Gaceta Civil, Tomo 38, Lima, 2016
13. E. BUSTAMANTE OYAGUE, *La Vocación Hereditaria del Conviviente Supérstite*, *El Nuevo Rostro del Derecho de Familia*, Motivensa, Lima, 2014, 1ª ed.

14. E. CASTRO AVILES, *El principio de prueba escrita para el reconocimiento judicial de la unión de hecho*, Diálogo con la Jurisprudencia, Tomo 195, Lima, 2014
15. E. VARSÍ ROSPIGLIOSI, “*Consideraciones generales sobre la unión de hecho*”, El Nuevo Rostro del Derecho de Familia, Motivensa, Lima, 2014, 1ª ed
16. E. VARSÍ ROSPIGLIOSI, *Tratado de Derecho de Familia*, Tomo II, Gaceta Jurídica, Lima, 2011, 1ª ed
17. F. RAMPAZZO SOARES, “*La experiencia jurídica brasileña y los Derechos Sucesorios de las Uniones de Hecho*”, El Nuevo Rostro del Derecho de Familia, Motivensa, Lima, 2014, 1ª ed.
18. G. MEDINA Y J. MENDELEWICZ, “*Responsabilidad por Disolución del Concubinato*”, en C. CALDERON PUERTAS y C. AGURTO GONZALES (Coords.), *Observatorio de Derecho Civil. La Familia Volumen II*, Motivensa, Lima, 2010
19. G. SALVATIERRA VALDIVIA, *A Propósito de la adquisición de bienes por las uniones de hecho*. Diálogo con la Jurisprudencia, Numero 86, Lima, 2005
20. H. CORNEJO CHÁVEZ, *Derecho Familiar Peruano*. Lima, 1985, 5ª ed
21. J. CALDERÓN BELTRÁN, *La Familia Ensamblada en el Perú*, Adrus, Lima, 2014, 1ª ed
22. J. CALDERON BELTRAN, *Uniones de Hecho. Efectos Patrimoniales, Personales, Derechos Sucesorios y su Inscripción Registral*, Adrus, Lima, 2015, 1ªed
23. J. PAZ SOLDAN. *Derecho Constitucional Peruano y la Constitución de 1979*. Lima, 1980, 6ª ed
24. J. PERALTA ANDÍA, *Derecho de Familia en el Código Civil*, Idemsa, Lima, 2008, 4ª ed
25. L. ALZAMORA, SILVA, *Derecho Romano*, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 1946.
26. L.CÁRDENAS RODRÍGUEZ, *Elusión del principio de prueba escrita en la unión de hecho*, Diálogo con la Jurisprudencia, Tomo 181, Lima, 2013
27. L. ECHECOPAR GARCÍA, *Derecho de Sucesiones*, Gaceta Jurídica, Lima, 1999
28. L. SANABRIA VIVAS, Luis. *Comentarios a la nueva Constitución de la República del Perú 1979*, Luan. Lima, 1980, 2ª ed

29. M. ARIAS-SCHREIBER PEZET, “El Derecho de Familia y los Contratos”, en F. DE TRAZEGNIES GRANDA, R. RODRÍGUEZ ITURRI, C. CÁRDENAS QUIROS y J. ALBERTO GARIBALDI (coords), *La Familia en el Derecho Peruano, Libro Homenaje al Dr. Héctor Cornejo Chávez*, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1990.
30. M. BERMUDEZ TAPIA, “Análisis del régimen patrimonial en las uniones de hecho”, *Gaceta Civil*, Tomo 38, Lima, 2016
31. M. BERMUDEZ TAPIA, *Derecho Procesal de Familia*, San Marcos, Lima, 2012, 1ª ed.
32. M. CASTILLO FREYRE, “La sucesión en las uniones de hecho”, *El Nuevo Rostro del Derecho de Familia*, Motivensa, Lima, 2014, 1ª ed.
33. M. DÍAZ CAÑOTE, *La unión de hecho y los derechos sucesorios*, Actualidad Civil, Tomo 24, Junio, 2016
34. M. RUBIO CORREA, *Estudio de la Constitución Política de 1993*. Lima, 1999, 1ª ed.
35. N. SOLARI, *Liquidación de Bienes en el Concubinato*, Ediciones Jurídicas. Buenos Aires, 1999
36. N. VILLON ANGELES, “La ley Nro. 30007, un avance hacia la concepción pluralista de la Familia”, *El Nuevo Rostro del Derecho de Familia*, Motivensa, Lima, 2014, 1ª ed.
37. P. BELTRAN PACHECO, “El régimen patrimonial de las uniones de hecho. Cuando lo que ley establece no es suficiente”, *Gaceta Civil*, Tomo 38, Lima, 2016
38. P. DE BARRON ARNICHES, “El reconocimiento de Derechos Sucesorios a las pareja de hecho en la experiencia española”, *El Nuevo Rostro del Derecho de Familia*, Motivensa, Lima, 2014, 1ª ed.
39. P. HERRERA ARANA Y M. TORRES MALDONADO, “La imprescriptibilidad del reconocimiento de la unión de hecho y la prescriptibilidad de la liquidación de la comunidad de bienes”, *Gaceta Civil*, Tomo 38, Lima, 2016
40. Y. VEGA MERE, *Las Nuevas Fronteras del Derecho de Familia*, Motivensa, Lima, 2009, 3ª ed